XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE FACENDA
Dirección Xeral da Función Pública

empregarse
procesos de ingreso

Proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración de la Xunta de Galicia (subgrupo A1)

Primer ejercicio

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique

1.- Según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de12 de mayo del Tribunal de Cuentas, la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance se efectuará previo nombramiento:

a) Por el presidente de la Sala de enjuiciamiento que conozca del asunto.
b) Por funcionario del propio Tribunal de Cuentas que dispondrá de tres días para renunciar al nombramiento.
c) Por funcionarios públicos que presten servicios en la provincia en que hayan ocurrido los actos que puedan constituir alcance.
d) Por un consejero de Cuentas integrante de la Comisión de Gobierno, en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal.

2.- Según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de12 de mayo del Tribunal de Cuentas, corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves respecto del personal al servicio del Tribunal:

a) Al Presidente del Tribunal.
b) A la secretaría general del Tribunal.
c) A la Comisión de Gobierno.
d) Al Pleno del Tribunal.

3.- La cuestión de ilegalidad se planteará según el artículo 123 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa:

a) El Juez o Tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los ocho días siguientes, sin que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
b) El Juez o Tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
c) El Tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los diez días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
d) Los Tribunales plantearán, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los cinco días siguientes aunque no conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

4.- Según el artículo 15. 1 de la Ley 50 /1997, del Gobierno, los Secretarios de Estado son nombrados y separados:

a) por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
b) por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
c) por Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
d) por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previo conocimiento del Consejo de Ministros.

5.- El artículo 55 de la Constitución Española de 1978 establece que cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, podrán ser suspendidos:

a) los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1.a) y d), y 5, artículos 21, 28 apartado 2 y artículo 37 apartado 2.
b) los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1.a) y d), y 5, artículos 21, 28 apartado 2 y artículo 38 apartado 2.
c) los derechos reconocidos en los artículos. 17, 18 apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1.a) y d), y 5, artículos 21, 28 apartado 2 y artículo 37 apartado 3.
d) los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1.a) y d), y 5, artículos 21, 28 apartado 3 y artículo 37 apartado 2.

6.-Según indica el artículo 6.4. d de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, el mandato de los Diputados del Parlamento de Galicia es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo en el siguiente supuesto:

a) la participación superior al 15 %, adquirida en todo o en parte, con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado, excepto que haya sido por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con Entidades del sector público.
b) la participación superior al 10 %, adquirida en todo o en parte, con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado, excepto que haya sido por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con Entidades del sector público.
c) la participación superior al 15 %, adquirida en todo o en parte, con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado, excepto que haya sido por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con Entidades del sector público de Galicia.
d) la participación superior al 10 %, adquirida en todo o en parte, con posterioridad a la fecha de formalización de su candidatura como Diputado, excepto que haya sido por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con Entidades del sector público.

7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo podrá dirigirse al Valedor do Pobo sin ninguna restricción ni limitación.
b) Los diputados, individualmente, los grupos parlamentarios y las comisiones del Parlamento de Galicia podrán solicitar la intervención del Valedor do Pobo en todas las cuestiones atribuidas a su competencia.
c) La Comisión de Peticiones podrá transmitirle además las que reciba en los términos del artículo 48 del Reglamento del Parlamento Gallego.
d) Ninguna autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, podrá presentar quejas ante el Valedor do Pobo.

8.- Según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, ésta:

a) Regula el tratamiento de los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento automatizado.
b) Regula el tratamiento de los datos de carácter personal registrado en soporte físico de personas físicas o jurídicas que los haga susceptibles de tratamiento automatizado.

c) Regula el tratamiento de los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento.
d) Regula el tratamiento de los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento automatizado, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos.

9.- Según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el tratamiento de datos de carácter personal que hagan referencia a la salud:

a) Requerirá consentimiento tácito del afectado.
b) Requerirá consentimiento expreso del afectado.
c) Requerirá consentimiento expreso y por escrito del afectado.
d) No requerirá consentimiento cuando dicho tratamiento sea necesario para el diagnóstico médico.

10.- Según el artículo 29, 2, de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando la Administración no ejecute sus actos firmes:

a) Los interesados solicitarán su cumplimiento mediante un escrito presentado al efecto. Si la ejecución no se produce en el plazo de un mes, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento ordinario.
b) Los afectados, si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
c) Podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.
d) Ninguna de las anteriores es una respuesta correcta.

11.- Según el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa:

a) En primera instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que no haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso no presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas en la instancia, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
b) En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano

jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
c) En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12.- En el artículo 5.1 del Real decreto 1398/1993 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora se dispone que:

a) El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto, hecho y fundamento.
b) El órgano competente resolverá la exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ya ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto, hecho y fundamento.
c) El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y fundamento.
d) El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en el momento anterior a la instrucción de los procedimientos sancionadores en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto, hecho y fundamento.

13.- Según el artículo 4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia, quedan excluidas del ámbito material de aplicación de la ley:

a) Las prestaciones autonómicas de carácter asistencial.
b) Las subvenciones a los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia.
c) Las subvenciones concedidas en virtud de razones de interés público, social, económico o humanitario.
d) Todas las anteriores son correctas.

14.- Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la difusión a través del perfil del contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación surtirá los efectos previstos:

a) En el Título II.
b) En el Título I del Libro V.
c) En el Título I del Libro III.
d) En el Título II del Libro II.

15.- En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se establece que la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento solo deberá acordarse:
a) Por la mesa de contratación, que lo deberá hacer público en el Perfil de Contratante.
b) Por la mesa de contratación, después de la adjudicación.
c) Por el órgano de contratación después de haberse adjudicado e indemnizado a los licitadores por los daños y perjuicios causados.
d) Por el órgano de contratación antes de la adjudicación.

16.- Según se establece en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto:

a) De contratación administrativa previo informe de los Delegados de prevención.
b) De autorización administrativa por el órgano competente en materia de seguridad de la Administración Pública correspondiente.
c) De autorización administrativa por los órganos competentes en materia laboral y sanitaria de las Administraciones Públicas correspondientes.
d) De una acreditación por la autoridad laboral, que será única y con validez en todo el territorio español.

17.-El artículo 21 del Real decreto 1398/1993 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora dispone respecto de los efectos de la resolución que:

a) Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podrá interponerse recurso administrativo ordinario.
b) Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podrá interponerse recurso administrativo ordinario.
c) Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa no serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrá interponerse recurso administrativo ordinario.
d) Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa no serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrá interponerse recurso administrativo ordinario.

18.- Según el artículo 16 de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Compensación se distribuirá de conformidad a lo establecido en al artículo 74.2 de la Constitución, entre Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía:

a) Por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
b) Por las Cortes Generales.
c) Por el Ministro de Economía.
d) Por el Consejo de Ministros.

19.- Según se desprende del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo, entre otros principios generales, al siguiente:

a) Identificar los riesgos
b) Definir los riesgos

c) Evitar los riesgos
d) Identificar y minimizar los riesgos que hayan podido existir

20.- En el artículo 103 apartado 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se señala que la garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores:

a) Después de la extinción del contrato.
b) Después de la adjudicación del contrato.
c) A la finalización del contrato.
d) Después de formalizado el contrato.

21.- En el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dispone que además de los supuestos previstos en el artículo 170, podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar contratos de servicios públicos, entre otros casos, en los siguientes:

a) En los de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 50.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años.
b) En los de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 100.000 euros y su plazo de duración sea inferior a diez años.
c) En los de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 100.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años.
d) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años.

22.- Según lo previsto en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, las provisiones de fondos de carácter permanente para la atención de gastos periódicos o repetitivos, tienen el carácter de:

a) Operaciones extrapresupuestarias.
b) Pagos a justificar.
c) Anticipos de Tesorería
d) Deuda de Tesorería.

23.- De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas actúan y se relacionan ponderando, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones, de acuerdo con el principio de:

a) Lealtad institucional.
b) Jerarquía.
c) Descentralización y desconcentración.
d) Coordinación.

24.- Según el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿podrá ser objeto de deliberación o acuerdo algún asunto que no figure incluido en el orden del día de la reunión de un órgano colegiado?:

a) Sí, cuando lo establezca el régimen propio de convocatorias del órgano colegiado.
b) Sí, cuando estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
c) Sí, cuando en la reunión esté presente el Presidente y Secretario y la mitad al menos de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

25.- De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa:

a) En todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
b) En todos los procedimientos iniciados a instancia de parte.
c) En todos los procedimientos, excepto en los casos de desistimiento de la solicitud o de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
d) En todos los procedimientos, excepto en los casos de prescripción o caducidad del procedimiento.

26.- A los efectos de cómputo de plazos y según lo establecido en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando un día fuese inhábil en el municipio en que residiese el interesado:

a) Se considerará hábil si en la sede del órgano administrativo el día tiene la condición de hábil.
b) Se considerará hábil si permanece abierto el registro del órgano competente para su tramitación.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Se considerará inhábil en todo caso.

27.- Según el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) La publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
b) La publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos.
c) La publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

d) La publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos cuando el interesado o su representante rechazara la notificación de una actuación administrativa.

28.- Según el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas provisionales correspondientes.
b) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas.
c) El órgano a quien competa resolver el recurso, podrá suspender, a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran determinadas circunstancias.
d) El órgano administrativo que tengan expresamente atribuida la potestad sancionadora podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

29.- En la organización de la actividad de las entidades que integran el sector público autonómico, el artículo 4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, contempla expresamente que se observará el principio de:

a) Desconcentración y coordinación.
b) Buena fe y confianza legítima.
c) Proximidad a los ciudadanos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30.- En la elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, dispone que el anteproyecto no tiene que ir acompañado de:

a) Una memoria justificativa sobre su legalidad, su acierto y su oportunidad, así como sobre las modificaciones e innovaciones que contiene.
b) Un informe económico-financiero de la consejería competente en materia de hacienda.
c) El informe del servicio jurídico correspondiente de la consejería.
d) Una tabla de vigencias.

31.- Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, en el marco del Estatuto le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de la siguiente materia:

a) Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.13 de la Constitución.
b) Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés del Estado, aunque su ejecución o explotación afecte a otra Comunidad Autónoma o provincia.

c) Los centros de contratación de mercancías o valores, en conformidad con las normas generales de Derecho Mercantil.
d) La promoción y ordenación del turismo dentro y fuera de la Comunidad.

32.- El Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 consta de un total de:

a) 57 artículos, 4 disposiciones adicionales y 7 disposiciones transitorias.
b) 56 artículos, 2 disposiciones adicionales y 7 disposiciones transitorias.
c) 56 artículos, 3 disposiciones adicionales y 4 disposiciones transitorias.
d) 54 artículos, 3 disposiciones adicionales y 5 disposiciones transitorias.

33.- Según el artículo 45 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, el Parlamento puede exigir la responsabilidad política de la Xunta y su presidente mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Dicha moción:

a) no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
b) no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
c) no podrá ser votada hasta que transcurran seis días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
d) no podrá ser votada hasta que transcurran seis días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

34.-Según el artículo 5 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia,

a) la Xunta se reúne en Consejo, que someterá su funcionamiento a los principios de unidad, colegialidad, eficacia y participación.
b) la Xunta se reúne en Consejo, que someterá su funcionamiento a los principios de unidad, colegialidad, participación y coordinación.
c) la Xunta se reúne en Consejo, que someterá su funcionamiento a los principios de unidad, eficacia, participación y coordinación.
d) la Xunta se reúne en Consejo, que someterá su funcionamiento a los principios de unidad, colegialidad, jerarquía y coordinación.

35.- De acuerdo con el artículo 37. 1 c de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, adoptarán la forma de Decreto:

a)las resoluciones del presidente de la Xunta, en los supuestos contemplados en el párrafo 1 del artículo 24, y en los números 1 y 7 del artículo 26 de esta Ley.
b)las resoluciones del presidente de la Xunta, en los supuestos contemplados en el párrafo 2 del artículo 26, y en los números 1 y 7 del artículo. 24 de esta Ley.
c)las resoluciones del presidente de la Xunta, en los supuestos contemplados en el párrafo 2 del artículo 24 , y en los números 1 y 7 del artículo 26 de esta Ley.
d)las resoluciones del presidente de la Xunta, en los supuestos contemplados en el párrafo 2 del artículo 24, y en los números 1 a 7 del artículo 26 de esta Ley.

36.- Según el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos:

a) dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan.
b) La mayoría de los miembros que en cada momento lo compongan.
c) Tres quintos de los miembros que en cada momento lo compongan.
d) La mayoría absoluta de los miembros que en cada momento lo compongan.

37.- Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local, de acuerdo con el artículo 75 bis de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,

a) las leyes del Estado o de las Comunidades autónomas que lesionen la autonomía constitucionalmente garantizada.
b) las leyes del Estado que lesionen la autonomía constitucionalmente garantizada.
c) las normas del Estado o de las Comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
d) las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

38.- Aprobar, cuando proceda, las medidas para garantizar los servicios mínimos en los casos de ejercicio del derecho de huelga por el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, es una función que le corresponde

a) Al Consejo de la Xunta de Galicia.
b) Al presidente de la Xunta de Galicia.
c) Al consejero competente en materia de función pública de Galicia.
d) Al director o directora general de la Función Pública de Galicia.

39.- Determinar los requisitos objetivos para la adquisición de los grados superiores dentro de cada cuerpo o escala, que se fundarán exclusivamente en criterios de mérito y capacidad, es una función que le corresponde:
a) A la Comisión de Personal.
b) Al consejero o consejera competente en materia de función pública.
c) A los consejeros o consejeras.
d) Al Consejo de la Xunta de Galicia.

40.- El Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Galicia contempla en su artículo 31 la reasignación de efectivos

a) Como una comisión de servicios de carácter obligatorio.
b) Como una medida de fomento del empleo.
c) Como una previsión y medida que podrá contenerse en los planes de empleo.
d) Como una previsión y medida que podrá contenerse en los concursos de traslados.

41.- De acuerdo con el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación las siguientes materias

a) Los criterios generales de acción social.
b) Las normas que fijan los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
c) Los planes de Previsión Social Complementaria.
d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

42.- Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con los otros principios de organización que a continuación se mencionan:

a) Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados.
b) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
c) Cooperación y coordinación con las otras Administraciones públicas.
d) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

43.- De conformidad con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en la organización central son órganos directivos:

a) Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

44.- Conforme a la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia, el dictamen del Consejo será solicitado:

a) En asuntos de competencia de la Xunta de Galicia, por su Presidencia.
b) Por la/el Consejera /-o o por la/el Secretaria/o General-Técnico, en asuntos competencia de su consejería.
c) Por las/los Delegadas/-os Territoriales y por las/los presidentas/-es de las entidades locales en aquellos supuestos en que la legislación lo requiera.
d) Todas las respuestas son correctas.

45.- En las reuniones del Pleno del Consejo Consultivo de Galicia, los acuerdos sobre dictámenes preceptivos se tomarán por:

a) Mayoría absoluta de los miembros que constituyan el Consejo.
b) Mayoría simple de los miembros que constituyan el Consejo.
c) Mayoría absoluta de los miembros electos que constituyan el Consejo.
d) Mayoría simple de los miembros electos que constituyan el Consejo.

46.- Según lo previsto en los artículos 47 y 60 de Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, constituyen una excepción al principio de anualidad presupuestaria:

a) La imputación de obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio.
b) La imputación de compromisos de gasto de inversión debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
c) La imputación de obligaciones que tengan su origen en sentencias judiciales.
d) Todas las anteriores son correctas.

47.- Según lo previsto en los artículos 99 y 100 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia,

a) Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular el correspondiente reparo, que deberá ser motivado y contener todas las objeciones realizadas al expediente.
b) Si los reparos afectan a la autorización y disposición de gastos y a la liquidación de derechos, se originará la suspensión de la tramitación del expediente, hasta que aquellos no sean subsanados cuando se omitan el expediente requisitos o trámites que se consideren esenciales a juicio de la Intervención.
c) Si los reparos afectan a la autorización y disposición de gastos y al reconocimiento de derechos, se originará la suspensión de la tramitación del expediente hasta que aquellos no sean subsanados cuando se omitan el expediente requisitos o trámites que se consideren esenciales a juicio de la Intervención o cuando ésta estime que la continuación del procedimiento pudiese causar quiebras económicas a la Comunidad Autónoma.
d) Si los reparos afectan a la autorización y disposición de gastos, al reconocimiento de obligaciones o al ordenamiento de pagos, se originará la suspensión de la tramitación del expediente hasta que aquellos no sean subsanados cuando se omitan el expediente requisitos o trámites que se consideren esenciales a juicio de la Intervención o cuando ésta estime que la continuación del procedimiento pudiese causar quiebras económicas a la Comunidad Autónoma.

48.- Según lo previsto en el artículo 25 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, si para el cumplimiento de las resoluciones que determinen obligaciones a cargo de la Comunidad o de sus organismos autónomos, no existiese crédito en el presupuesto en vigor,

a) Se solicitará del Parlamento, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución, la concesión de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito.
b) Se solicitará del Parlamento, dentro de los tres meses siguiente a la notificación de la resolución, la concesión de un crédito extraordinario.
c) Se solicitará del Parlamento, dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución, la concesión de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito.
d) Se solicitará del Parlamento, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución, la concesión de un suplemento de crédito.

49.- Según lo previsto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el régimen de protección de datos que se establece en esta

ley no será de aplicación, sin perjuicio de la comunicación de su existencia, sus características generales y su finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos:

a) A los ficheros derivados del Registro Civil y del registro Central de penados y rebeldes.
b) A los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada.
d) A los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

50.- Según lo previsto en el artículo 29 de la ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se considera gasto realizado:

a) Aquel que se ejecute en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
b) Aquel que se ejecute en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones y responda a la naturaleza de la actividad subvencionada.
c) Aquel que fue efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
d) Todas son correctas.

51.- Según lo previsto en el artículo 31 de la ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, sobre el procedimiento de aprobación del gasto y pago.

a) La resolución de concesión de la subvención llevará consigo la aprobación del gasto correspondiente.
b) No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que se produzca el incremento de los créditos derivado de una generación, ampliación, transferencia o incorporación de crédito.
c) No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tenga pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma.
d) Todas las respuestas son correctas.

52.- Según lo previsto en la ley 6/1985 de 24 de junio del Consello de Contas,

a) No podrán ser designados Consejeros de Cuentas quienes ejerzan funciones directivas o ejecutivas en centrales sindicales.
b) No podrán ser designados Consejeros de Cuentas los perceptores de subvenciones con cargo a fondos públicos.
c) Si es nombrado consejero de cuentas un Diputado del Parlamento de Galicia, antes de tomar posesión, deberá renunciar a su cargo o función.
d) Todas son correctas.

53.- Según el art. 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) 1.Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. 2. El recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 4. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales del Derecho de Navarra.

b) 1.Las cuestiones no expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. 2. El recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de distinta Administración. 4. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

c) 1.Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. 2. El recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 4. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

54.- El artículo 45.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dispone que:

a) El Juez examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
b) El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de

los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
c) Se examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si se estima que es válida, se admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, el Tribunal requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
d) El Secretario judicial examinará, a instancia de parte interesada, la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Secretario judicial se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

55.- El artículo 65.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa dispone que:

a) Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante auto, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra este auto no cabrá recurso alguno.
b) Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de quince días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso.
c) Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones no se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de quince días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia cabrá recurso.
d) Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.

56.- El artículo 13 del Real decreto 1398/1993 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora dispone que la iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizarán con el contenido mínimo siguiente:

a) 1. Identificación de la persona o personas responsables. 2. Los hechos sucintos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 3. Instructor y secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. 4. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le

atribuya competencia, indicando la posibilidad de que el responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 18. 5. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 25. 6. Indicación del derecho a formular alegaciones. a la audiencia en el procedimiento y los plazos para recurrir.

b) 1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 2. Los hechos profusamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, la calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 3. Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de abstención y recusación de los mismos. 4. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 18. 5. Medidas de carácter cautelar que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 25. 6. Indicación del derecho a formular recursos y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

c) 1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 2. Los hechos sucintamente expuestos que motivan el procedimiento, su calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.3. Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación y abstención de los mismos. 4. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8. 5. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15. 6. Indicación del derecho a formular alegaciones y recursos, a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

d) 1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 2. Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 3. Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. 4. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8. 5. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15. 6. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

57.- El artículo 3 de la Ley 3/1993, de 15 de junio, de normalización lingüística dispone que:

a) Los poderes públicos adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de su lengua. Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y Tribunales para obtener la protección del derecho a emplear la lengua gallega.
b) Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de lengua. Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y Tribunales para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua.
c) Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de su lengua; de modo que los ciudadanos gallegos podrán dirigirse a los jueces y Tribunales de esta Comunidad para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua gallega.
d) Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que nadie sea discriminado por razón de la lengua. Los ciudadanos gallegos tendrán que dirigirse a los jueces y Tribunales para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua.

58.- Según el artículo 9.1 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística:

a) En los registros públicos dependientes de la Administración autonómica, los asentamientos se harán en la lengua oficial de Galicia Si el documento es bilingüe, se inscribirá en la lengua que indique quien lo presenta en el registro. En los registros públicos no dependientes de la Comunidad Autónoma, la junta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, el uso normal del gallego y el castellano.
b) En los registros de la propiedad dependientes de la Administración autonómica, los asentamientos se harán en la lengua oficial en que este redactado el documento o se haga la manifestación. Si el documento es bilingüe, se inscribirá en la lengua que indique quien lo presenta en el registro. En los registros civiles no dependientes de la Comunidad Autónoma, la junta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, el uso normal del gallego.
c) En los registros públicos gallegos, los asentamientos se harán en la lengua oficial en que este redactado el documento o se haga la manifestación. Si el documento es bilingüe, se inscribirá en la lengua que indique quien lo presenta en el registro. En los registros públicos no dependientes de la Comunidad Autónoma, la junta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, el uso normal del gallego y el castellano.
d) En los registros públicos dependientes de la Administración autonómica, los asentamientos se harán en la lengua oficial en que este redactado el documento o se haga la manifestación. Si el documento es bilingüe, se inscribirá en la lengua que indique quien lo presenta en el registro. En los registros públicos no dependientes de la Comunidad Autónoma, la junta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, el uso normal del gallego.

59.- El artículo 10.2 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística dispone que:

a) Corresponde a la Comunidad autónoma de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios y provincias, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia. El nombre de las vías urbanas será determinado por el ayuntamiento correspondiente.
b) Corresponde a la Comunidad autónoma de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de las provincias, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia. El

nombre de las vías urbanas será determinado por el órgano parlamentario correspondiente.
c) Corresponde a la junta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia. El nombre de las vías urbanas será determinado por el ayuntamiento correspondiente.

d) Corresponde a la junta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia. El nombre de las vías urbanas será determinado por el alcalde correspondiente.

60.- En el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea se establece que:

a) La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los demás Estados, así como su identidad nacional representativa, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, su riqueza cultural, mantener el orden público general y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
b) La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
c) La Unión europea y sus Instituciones propias respetarán la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados y la ley, así como su identidad nacional, inherente a las propias estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetarán las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial nacional, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional y el orden público seguirán siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

61.- El artículo 9 del Tratado de la Unión Europea dispone que:

a) La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
b) La Unión respetará en todas las actividades de sus Instituciones y órganos propios el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga o pueda llegar a tener la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.

c) La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga o pueda llegar a tener la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional, pero puede llegar a sustituirla.
d) La Unión respetará en todas las actividades que se señalen por sus Tratados el principio de la igualdad de los ciudadanos, quienes serán beneficiados por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.

62.- Según el artículo 16.1 del Tratado de la Unión Europea:

a) El Consejo europeo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas comunes y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados y las leyes.
b) El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.
c) El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa, la consultiva y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas comunes propias y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados y por ley.
d) El Consejo europeo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá con la Comisión europea funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

63.- Según el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea:

a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General, los tribunales especializados y el Abogado General. Garantizará el respeto del Derecho Comunitario en la interpretación y aplicación de los Tratados.
Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva y la igualdad en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho y de la ley en la interpretación y aplicación de los Tratados Comunitarios
Los Estados miembros no establecerán vías de recurso pues quedará garantizada la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General, los tribunales especializados y el Abogado General. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados Comunitarios.
Los Estados miembros establecerán las vías de recurso que resulten necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

64.- Según el artículo 3.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

a) La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: la unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia mercantil necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común; la política comercial común y la política tributaria.
b) La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: la unión aduanera; la cohesión económica, social y territorial; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros; la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común; la política comercial común.
c) La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: la unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común; la política comercial común.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

65.-Según el artículo 26.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

a) La Unión adoptará las medidas destinadas a restablecer el mercado interior y a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.
b) La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.
c) La Unión adoptará las medidas necesarias para establecer el mercado interior y para garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados y las Leyes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

66.-Según el artículo 45.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

a) La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
b) La libre circulación de personas y cosas supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
c) La libre circulación de personas supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad y sexo entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

d) La libre circulación de personas y mercancías supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad y sexo entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

67.-Según el artículo 11.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

a) Instruido el procedimiento, y quince días antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se les facilitará una copia de los documentos obrantes en el procedimiento, concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

b) Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se les facilitará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y concediéndoles un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

c) Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se les facilitará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

d) Instruido el procedimiento, y diez días antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 36.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se les facilitará una relación de los documentos y pruebas obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

68.-Según el artículo14.2 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

a) Nunca podrá iniciarse procedimiento abreviado antes del trámite de audiencia.

b) Sólo podrá iniciarse procedimiento abreviado antes del trámite de audiencia.
c) Sólo podrá iniciarse procedimiento abreviado después del trámite de audiencia.
d) Siempre podrá iniciarse procedimiento abreviado después del trámite de audiencia.

69.-Según el artículo 18.3 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

a) La responsabilidad entre las Administraciones implicadas nunca es solidaria.
En el orden interno, la distribución de responsabilidad entre las distintas Administraciones públicas se regirá por los criterios que establezcan las fórmulas colegiadas.
b) La responsabilidad entre las Administraciones implicadas es solidaria.
En el orden interno, la distribución de responsabilidad entre las distintas Administraciones públicas concurrentes en el hecho se regirá por la proporción que establezcan las normas colegiadas.
c) La responsabilidad entre las Administraciones implicadas es solidaria.
En el orden interno, la distribución de responsabilidad entre las distintas Administraciones públicas se regirá por los criterios que establezcan las fórmulas colegiadas.
d) La responsabilidad entre las Administraciones implicadas puede ser solidaria.
En el orden interno, la distribución de responsabilidad entre las distintas Administraciones públicas concurrentes se regirá por los criterios de distribución proporcional que establezcan las fórmulas colegiadas.

70.-Según el artículo 21.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

a) Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, el órgano competente acordará la iniciación del procedimiento, notificando dicho acuerdo a los interesados, con indicación de los motivos del mismo, y concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.

b) Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, culpables de un acto doloso o negligente, el órgano competente acordará la iniciación del procedimiento, notificando dicho acuerdo a los interesados, con indicación de los motivos del mismo, y concediéndoles un plazo de veinte días para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.

c) Para la exigencia de responsabilidad personal a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, el órgano competente acordará la iniciación del procedimiento, notificando dicho acuerdo a los interesados, con indicación de los motivos del mismo, y concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

71.- Según se dispone en el artículo 77 del Estatuto Básico del Empleado Público el personal laboral se clasificará de conformidad

a) Con lo dispuesto en el propio Estatuto Básico del Empleado Público
b) Con la legislación laboral
c) Con lo dispuesto en las relaciones de puestos de trabajo de cada Administración Pública
d) Con lo dispuesto en las normativa de función pública de cada Comunidad Autónoma o del resto de las Administraciones Públicas.

72.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales
a) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por ciento del colectivo convocado.
b) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30 por ciento del colectivo convocado.
c) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por ciento del colectivo convocado.
d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 50 por ciento del colectivo convocado.

73.- En el Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia se establece que podrán concederse permutas o rotaciones de los puestos de trabajo entre dos o más trabajadores o trabajadoras, personal fijo, cuando concurra, entre otras circunstancias, lo siguiente:

a) Que cuenten con más de dos años de servicios continuados en la Administración.
b) Que les falten a los trabajadores o a las trabajadoras más de tres años para la jubilación.
c) Que les falten a los trabajadores o a las trabajadoras al menos seis años para la jubilación.
d) Que cuenten con más de un año de servicios continuados en la Administración.

74.- El período de prueba fijado en el artículo 14 del Convenio Colectivo Único para el personal laboral, para las categorías incluidas en el grupo III será de:

a) 15 días
b) Un mes
c) Dos meses
d) Tres meses

75.- La autorización de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público, requiere a tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

a) Previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma o pleno de la Corporación Local conforme a la adscripción del segundo puesto
b) Informe favorable del Consejo Superior de la Función Pública
c) Informe de la correspondiente Junta de Personal
d) Todas las respuestas son correctas

76.- En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se establece que los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas

a) Se inscribirán a instancia de las empresas en el Registro General de Licitadores y Empresas Clasificadas.
b) Se inscribirán en los correspondientes Registros de Licitadores de las Administraciones Públicas competentes.
c) Se comunicarán de oficio a las respectivas Administraciones contratantes.
d) Se inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda en función del órgano que los hubiese adoptado.

77.- El valor estimado de los contratos, a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

a) Vendrá determinado por el importe anual sin incluir las prórrogas
b) Vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto Sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación.
c) Vendrá determinado por el importe total, incluyendo el Impuesto Sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación.
d) Vendrá determinado por el importe anual incluyendo el Impuesto Sobre el Valor Añadido.

78.- En relación a los contratos de obras y según se desprende del artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se efectuará el replanteo del proyecto

a) Una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de obra.
b) Una vez aprobado el proyecto y después de haberle adjudicado al contratista el contrato de obras.
c) Una vez aprobado el proyecto y después de que se haya formalizado el correspondiente contrato de obras.
d) Una vez aprobado el proyecto y cuando así lo determine el órgano de contratación.

79.- El artículo 154 del Reglamento del Parlamento de Galicia, de 1 de septiembre de 1983, establece, con relación a las preguntas parlamentarias, que:

a) si no se indica lo contrario, se entiende que quien formula la pregunta solicita respuesta oral y, si solicita respuesta escrita y no lo especifica, se entiende que ésta ha de tener lugar en la Comisión correspondiente.
b) si no se indica lo contrario, se entiende que quien formula la pregunta solicita respuesta por escrito y, si solicita respuesta oral y no lo especifica, se entiende que ésta ha de tener lugar en el Pleno.
c) si no se indica lo contrario, se entiende que quien formula la pregunta solicita respuesta por escrito y, si solicita respuesta oral y no lo especifica, se entiende que ésta ha de tener lugar en la Comisión correspondiente.
d) si no se indica lo contrario, se entiende que quien formula la pregunta solicita respuesta oral y, si solicita respuesta escrita y no lo especifica, se entiende que ésta ha de tener lugar Comisión correspondiente.

80.- No es causa legal de cese del Valedor do Pobo, de acuerdo por lo establecido por el artículo 5. 1 de la Ley 6 / 1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia:

a) ser condenado, mediante sentencia firme, por delito grave.
b) la expiración del plazo de su nombramiento.
c) el notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes de su cargo.
d) la renuncia.

81.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) Las candidaturas electorales no podrán ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo establecido para la subsanación de irregularidades y solo por fallecimiento o renuncia del titular, operándose automáticamente la subsanación por el orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa.
b) El apoderamiento se formaliza ante Notario o ante el Secretario de la Junta Electoral Provincial o de Zona, los cuales expiden la correspondiente credencial, conforme al modelo oficialmente establecido.
c) La Junta Electoral de Galicia es el órgano competente para aprobar el modelo oficial de las papeletas correspondientes a cada circunscripción.
d) Las candidaturas electorales no podrán ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo establecido para la subsanación de irregularidades y solo por fallecimiento o renuncia del titular, operándose automáticamente la subsanación por el orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa.

82.-El artículo 74.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos:

a) 94.2, 145.2 y 158.3 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
b) 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
c) 94.2, 145.3 y 158.2 se adoptarán por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
d) 94.1, 145.2 y 158.1 se adoptarán por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.

83.- De acuerdo con el artículo 75.2 de la Constitución Española de 1978, las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, según el art. 75.3 de la Constitución:

a) la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes ordinarias y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
b) la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
c) la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, el régimen electoral general, las leyes ordinarias y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
d) la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las instituciones básicas del Estado, las leyes ordinarias y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

84.-Las elecciones, según establece el artículo 68.6 de la Constitución Española de 1978,

a) tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) tendrán lugar entre los treinta cinco días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
c) tendrán lugar entre los treinta días y sesenta cinco días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
d) tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

85.- El artículo 74.1 de la Constitución Española de 1978 establece que las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para:

a) ejercer las competencias legislativas que el Título II atribuye a las Cortes Generales.
b) ejercer las competencias no legislativas que el Título III atribuye a las Cortes Generales.
c) ejercer las competencias legislativas que el Título III atribuye a las Cortes Generales.
d) ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye a las Cortes Generales.

86.-Según el artículo 25.f de la Ley 50/1997, del Gobierno, cuando la disposición o resolución de un Ministro afecte a varios Departamentos revestirá la forma de:

a) Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de la Presidencia.
b) Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta de los Ministros interesados.
c) Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
d) Orden de cualquiera de los Ministros interesados, dictada a propuesta del Ministro de la Presidencia.

87.- Según el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, la competencia de los órganos jurisdiccionales en Galicia se extiende:

a) a las cuestiones de competencia entre órganos judiciales en Galicia.
b) en el plano penal y social, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión.
c) en el plano contencioso administrativo, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y de revisión, cuando se trate de actos dictados por la Xunta y por la Administración de Galicia, en aquellas materias que le corresponda legislar a la Comunidad Autónoma.
d) en el plano penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de casación para unificar doctrina.

88.- Según el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con:

a) los rendimientos de los impuestos que establezca la Comunidad Autónoma.
b) los recargos sobre impuestos estatales y autonómicos.
c) los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado a que se refiere la Disposición adicional 2ª y de todos aquellos de cesión aprobada por las Cortes Generales.
d) un porcentaje de participación en lo que se recaude en el total del Estado por impuestos directos e indirectos, excluidos los monopolios fiscales.

89.- En relación con la dotación de la fundación y de conformidad con la Ley 12/2006, de 1 diciembre, de fundaciones de interés gallego, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resulta inexacta?:

a) Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 euros.
b) Si la aportación no es dineraria, deberá incorporarse a la escritura de constitución la tasación realizada por un experto independiente.
c) Se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.
d) Se aceptará como dotación el compromiso de aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en títulos de los que conllevan ejecución.

90.- En la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, se indica que los recursos económicos de los Organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:

a) Los productos y rentas de los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan.
c) Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entidades privadas y de particulares.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

91.-Según la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la creación de entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico, requiere autorización por ley, salvo:

a) Los Organismos autónomos.
b) Las Agencias públicas autonómicas.
c) Las Entidades públicas empresariales.
d) Los Consorcios autonómicos.

92.- Según la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, el Consejo Consultivo de Galicia está integrado por consejeras y consejeros electivos que ejercerán su mandato por:

a) Un periodo de seis años, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante cuatro o menos años.
b) Un periodo de doce años, si tuvieron la condición de presidenta o presidente durante más de cuatro años.
c) Un periodo de seis años, renovable una sola vez.
d) Un periodo de cuatro años, renovable una sola vez.

93.- Según lo previsto en la ley orgánica 2/1982, de12 de mayo del Tribunal de Cuentas, los consejeros de cuentas:

a) Se designarán por el Gobierno en la forma determinada en la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
b) Serán designados entre Magistrados y Fiscales, profesores de Universidad y funcionarios públicos de reconocida competencia, que en los dos años anteriores hayan tenido a su cargo la gestión de los ingresos del sector público.
c) Serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un periodo de nueve años.
d) Serán nombrados por el Rey a propuesta del Presidente de Tribunal.

94.- Según lo previsto en la ley orgánica 2/1982, de12 de mayo del Tribunal de Cuentas, respecto de la responsabilidad contable:

a) No habrá lugar a la exigencia de responsabilidad subsidiaria cuando se pruebe que el presunto responsable no pudo cumplir las obligaciones, cuya omisión es causa de aquélla con los medios personales y materiales que tuviere a su disposición en el momento de los hechos.
b) Quedarán exentos de responsabilidad quienes actúen en virtud de obediencia debida.
c) No se exigirá responsabilidad, cuando el retraso en la rendición, justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas.
d) La b) y la c) son ciertas.

95.- Según lo establecido en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, respecto de las tasas que pueden imponer las Comunidades Autónomas:

a) Para la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse en cuenta razones sociales, benéficas, culturales o de interés público.
b) El rendimiento previsto para cada tasa debe cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
c) Las comunidades autónomas podrán establecer tasas por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de derecho público de su competencia, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando no sean de solicitud voluntaria para los administrados y no se presten o realicen por el sector privado.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

96.- Según el artículo 19.Dos de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos y en el caso del Impuesto sobre la renta de las personas físicas:

a) Fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y deducciones de la cuota y bonificaciones.
b) Fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la gestión y deducciones de la cuota.

c) Fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y deducciones de la cuota y bonificaciones.
d) Fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.

97.- Según lo previsto en la Ley 6/1985 de 24 de junio del Consello de Contas, la iniciativa para el ejercicio de la función fiscalizadora, le corresponde:

a) Al propio Consello y a petición de las entidades a las que se refiere al artículo 2 de la Ley.
b) Al Parlamento de Galicia.
c) Al Presidente de la Xunta de Galicia.
d) Al Tribunal de Cuentas según el plan de fiscalización elaborado al efecto.

98.- Según lo previsto en la Ley 6/1985 de 24 de junio del Consello de Contas, la distribución de asuntos entre las secciones le corresponderá:

a) A la Comisión de Gobierno.
b) Al Consejero Mayor.
c) Al secretario general.
d) A la comisión parlamentaria creada al efecto.

99.-Según el artículo 5 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, los órganos de las administraciones que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones:

a) Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
b) Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación y los criterios objetivos de adjudicación de las subvenciones, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
c) Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución y el procedimiento de concesión de las subvenciones, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
d) Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

100.- Serán funciones del Consejo Superior de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, según lo previsto en la Ley 12/2006, de 1 diciembre, de fundaciones de interés gallego:

a) Planificar y proponer las actuaciones necesarias para promover y fomentar las fundaciones de interés gallego.
b) Difundir la existencia y las actividades de las fundaciones.
c) Controlar el proceso de liquidación de las fundaciones.
d) Procurar la utilización efectiva y adecuada de la denominación «Fundación» y denunciar, en su caso, ante la autoridad competente su utilización por otra clase de entidades.

101.-De conformidad con lo previsto en la Ley 12/2006, de 1 diciembre, de fundaciones de interés gallego, en el balance de situación elaborado por el patronato, se expresará:

a) El cuadro de financiación.
b) Los bienes y derechos que conforman el activo de la entidad y las obligaciones y fondos propios que forman su pasivo.
c) Un inventario de los elementos patrimoniales.
d) El detalle de las sociedades participadas.

102.- A los efectos de lo establecido en la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas ¿se considera actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales?

a) Sí
b) No
c) No, toda vez que esa Ley se aplica solo al personal de las Administraciones Públicas pero no a los cargos electivos
d) Sí, pero sólo las actividades públicas enumeradas en el artículo 11 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

103.-En el artículo 7 apartado 2 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se establece que los servicios prestados en el segundo puesto o actividad

a) Se computará a efectos de trienios
b) Se computará a efectos de trienios y de derechos pasivos
c) No se computarán a efectos de trienios, pero sí a efectos de derechos pasivos
d) No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto.

104.-El artículo 144 del Reglamento del Parlamento de Galicia, de 1 de septiembre de 1983, dispone que los miembros de la Xunta, bien por petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, deberán comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para la adopción de tales acuerdos le corresponde:

a) a tres grupos parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión según los casos.
b) a dos grupos parlamentarios o a la cuarta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión según los casos.
c) a un grupo parlamentario o a la tercera parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión según los casos.
d) a dos grupos parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión según los casos.

105.- No corresponde a la Xunta, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia,

a) dictar Decretos Legislativos en los supuestos de delegación expresa del Parlamento.
b) informar la interposición de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, así como el personarse en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a Galicia y el planteamiento de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
c) resolver mediante decreto los conflictos de atribuciones que se susciten entre las diversas Consellerías.
d) aprobar los proyectos de Ley para su remisión al Parlamento y acordar en su caso su retirada.

106.- Con arreglo al artículo 29.2 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, el derecho a los tiempos de emisión gratuita, enumerados en el apartado anterior:

a) sólo corresponde a los partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura, al menos, en tres circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma.
b) sólo corresponde a los partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura, al menos, en dos circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma.
c) sólo corresponde a los partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura, al menos en cuatro circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma.
d) sólo corresponde a los partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura en todas las circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma.

107.- El artículo 9. 2 de la Ley 50 / 1997, del Gobierno, indica que el Secretariado del Gobierno se integra:

a) en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia.
b) en la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
c) en la estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno.
d) en la estructura orgánica del Ministerio de Administraciones Públicas.

108.- El artículo 86.1 de la Constitución Española de 1978, reconoce al Gobierno la facultad de dictar Decretos-Leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero establece que no podrá afectar:

a) al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Capítulo 1º del Título I de la Constitución ni al régimen de las Comunidades Autónomas.
b) al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
c) al ordenamiento de los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
d) al ordenamiento de los derechos, deberes y libertades regulados en el Capítulo 2º del Título II, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

109.- Si se quisiera reformar el Título II de la Constitución Española de 1978, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, su artículo 167.3 dispone que:

a) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
b) será sometida a referéndum para su ratificación, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, en todo caso.
c) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los quince días siguientes a su aprobación, la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

110.- Según el artículo 62 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes Orgánicas correspondientes:

a) tendrá que formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencias.
b) podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de tres meses, el conflicto de competencias.
c) podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencias.
d) tendrá que formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de tres meses, el conflicto de competencias.

111.- El artículo 18. 3 de la Ley 6 / 1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, indica que las quejas al Valedor do Pobo deberán presentarse:
a) en el plazo de un año cumplido a partir del conocimiento de los hechos.
b) en el plazo de dos años cumplidos a partir del conocimiento de los hechos.
c) en el plazo de un año cumplido a partir de la denuncia de los hechos.
d) en el plazo de dos años cumplidos a partir de la denuncia de los hechos.

112.- Según el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con:

a) los rendimientos de los impuestos que establezca la Comunidad Autónoma.
b) los recargos sobre impuestos estatales y autonómicos.
c) los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado a que se refiere la Disposición adicional 2ª y de todos aquellos de cesión aprobada por las Cortes Generales.
d) un porcentaje de participación en lo que se recaude en el total del Estado por impuestos directos e indirectos, excluidos los monopolios fiscales.

113.- Según lo previsto en el artículo 73 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, la fase de disposición del gasto es:

a) La operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad Autónoma, en cuantía cierta, una vez efectuada la pertinente liquidación.

b) El acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda la realización de un gasto, calculado de forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario legalmente destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que puedan ser consecuencia de aquel.
c) El acto en virtud del cual se acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que de acuerdo con el derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de prestaciones.
d) Es el acto en virtud del cual se certifica la existencia de crédito suficiente calculado de forma cierta, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario legalmente destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

114.- Según lo previsto en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, la autorización de transferencias de crédito desde el programa de imprevistos y funciones no clasificadas a los conceptos y artículos de los demás programas de gasto, cualquiera que sea la función o sección a que corresponda, corresponde a:

a) Al Consejo de la Junta.
b) Al titular de la Consejería correspondiente
c) Al consejero de Economía y Hacienda.
d) Al Consejo de la Junta a propuesta del consejero de Economía y Hacienda.

115.- Según el artículo 14 de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, éstas precisarán de autorización del Estado:

a) Para concertar operaciones de crédito destinadas a la realización de gastos de inversión y que su importe supere el 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
b) Para concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería.
c) Para concertar las operaciones previstas en los apartados a) y b) anteriores siempre que de la información suministrada por las Comunidades Autónomas, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

116.- A los efectos de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales se entenderá por prevención, tal y como se señala en su artículo 4

a) El conjunto de medidas que deben adoptar los empresarios y los trabajadores para evitar cualquier tipo de riesgo.
b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
c) Las medidas y actividades contempladas en los Planes de prevención de riesgos aprobadas por las empresas y por los servicios de prevención.
d) El conjunto de medidas que los servicios de prevención de las empresas deben adoptar en colaboración que los Comités de Seguridad y Salud.

117.- Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales la regulación de los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva, le corresponderá efectuarla:

a) A los empresarios.
b) A los servicios de prevención, propios o ajenos.
c) A los empresarios en colaboración con los Delegados de Prevención.
d) Al Gobierno.

118.- Segundo se desprende del artículo 94 del Estatuto Básico del Empleado Público ¿con arreglo a cual de los siguientes principios no se ejercerá la potestad disciplinaria?

a) Principio de culpabilidad.
b) Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
c) Principio de proporcionalidad.
d) Principio de tipicidad de las faltas y sanciones.

119.- Según el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Galicia, les corresponde a los consejeros o consejeras

a) Autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto
b) Emitir informe sobre la adscripción de los cargos y escalas a su consejería
c) Aprobar los planes de empleo
d) Determinar los intervalos de niveles de puestos de trabajo que les corresponderían a los cuerpos o escalas del personal funcionario.

120.- Según lo previsto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, de qué plazo dispone el responsable del fichero para hacer efectivo el derecho de rectificación:

a) Seis meses desde la recepción de la solicitud.
b) Un mes desde la recepción de la solicitud.
c) Diez días desde la recepción de la solicitud.
d) Tres días desde la recepción de la solicitud.

121.- Según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan:

a) Conferencias Sectoriales.
b) Comisiones Bilaterales de Cooperación.
c) Comisiones de Gobierno.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

122.- Según el artículo 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, queda expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, cuando transcurra:

a) El plazo 4 años desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución.
b) El plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución.
c) El plazo de 2 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución.
d) El plazo de 1 mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución.

123.- Si las leyes que establezcan las infracciones y sanciones no fijan plazos de prescripción, según el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) Las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses
c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

124.- Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con independencia de lo que regulen los estatutos de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, el Plan inicial de actuación del Organismo público, incluirá en todo caso, los siguientes extremos:

a) Los objetivos que deba alcanzar en el área de actividad encomendada.
b) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el Organismo.
c) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
d) La facultad de creación o participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

125.- Según la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, señala que afirmación es incorrecta en relación con las agencias públicas autonómicas:

a) Son entidades instrumentales que pueden ejercer actividades de intervención, fomento, gestión de servicios públicos o apoyo a la función administrativa en régimen de descentralización funcional.
b) Son entidades a las que, para el cumplimiento de programas específicos, se les encomienda la realización de actividades en régimen de descentralización funcional y gestión por objetivos.
c) Son entidades en las que el régimen jurídico externo se regula por el derecho privado o por el derecho administrativo, según determinen sus leyes de creación y la normativa general aplicable.

d) Son entidades en las que su personal estará constituido por personal funcionario, estatutario y/o laboral de la Xunta de Galicia y, en su caso, por personal laboral propio.

126.- Según el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

a) Por unanimidad de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento Europeo
b) Por decisión de una mayoría de dos tercios, el Parlamento y el Consejo Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento Europeo
c) Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento Europeo.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

127.- El artículo 1.3 del Real decreto 1398/1993 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora dispone que:

a) Quedan excluidos del presente Reglamento los procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en materia financiera y fiscal y los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social. Este Reglamento no tendrá carácter supletorio de las regulaciones de tales procedimientos
b) Quedan excluidos del presente Reglamento los procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social. No obstante, este Reglamento tiene carácter supletorio de las regulaciones de tales procedimientos.
c) Quedan excluidos del presente Reglamento los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual y los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social. No obstante, este Reglamento tiene carácter supletorio de las regulaciones de tales procedimientos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

128.- Respecto de la tramitación urgente del expediente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los precios establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización de los contratos

a) Se reducirán en quince días.
b) Se reducirán a la mitad, excepto el plazo de un mes previsto para la formalización del contrato en el artículo 156.3, párrafo primero.

c) Se reducirán a la mitad, excepto el plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 156.3 como período de espera antes de la formalización del contrato.
d) Se reducirán según establezca el órgano de contratación dada su preferencia en la tramitación.

129.- En el procedimiento restringido regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

a) Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.
b) Sólo podrán presentar proposición aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, haya negociado con ellos la Administración los términos del contrato.
c) Podrán presentar proposiciones todos los empresarios que tengan la clasificación exigida en la contratación.
d) No podrán presentar proposiciones mas que los cinco empresarios con los que como máximo habrá negociado la Administración los términos del contrato.

130.- Respecto de la jornada de trabajo el Convenio Colectivo Único para el personal laboral establece que no tendrán naturaleza de horas extraordinarias aquellas que, excediendo de las 37,30 horas semanales, no superen las

a) 1.135 horas anuales
b) 1.545 horas anuales
c) 1.665 horas anuales
d) 1.775 horas anuales

131.- Según establece el artículo 10 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quien acceda por cualquier Título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esa Ley resulte incompatible con el que había venido desempeñando, deberá optar por uno de ellos

a) Antes del nombramiento correspondiente.
b) En el plazo de un mes desde el nombramiento del nuevo puesto.
c) En el plazo de 15 días a contar desde el nombramiento del nuevo puesto.
d) Dentro del plazo de toma de posesión.

132.- Según lo previsto en la ley 6/1985 de 24 de junio del Consello de Contas, el Consejero Mayor será nombrado por el Presidente de la Xunta de Galicia, por un periodo de:

a) Seis años
b) Tres años
c) Dos años
d) Cuatro años

133.- Según el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las

subvenciones reguladas en esta ley, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Las personas o entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, en los términos que reglamentariamente se determinen.
b) Las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 7 y 8 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que carezcan de personalidad jurídica.
d) Todas las anteriores son correctas.

134.- Según el artículo 16 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, la elaboración de estudios y análisis sobre la actividad subvencional de la Comunidad Autónoma, es uno de los fines para los que habrá de servir:

a) El registro público de subvenciones
b) El control financiero de las subvenciones
c) El plan estratégico de subvenciones
d) El órgano colegiado previsto en el artículo 21 de la ley.

135.- Según el artículo 8.1 de la Constitución Española de 1978:

a) Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía, unidad e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
b) Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

c) Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento jurídico nacional.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

136.- Según el artículo 59.4 de la Constitución Española de 1978:

a) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
b) Para ejercer la Regencia es preciso ser español de origen y mayor de edad.
c) Para ejercer la Regencia es preciso ser español de nacimiento y mayor de edad.
d) Ninguna respuesta es correcta.

137.- El artículo 8.1 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) La afectación de los bienes y derechos del patrimonio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia se acordará a instancia de parte por la persona

titular de la consejería competente en materia de patrimonio mediante decreto, a iniciativa propia o a petición de la consejería o entidad interesada en la afectación.
b) La afectación de los bienes y derechos del patrimonio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia se acordará de oficio por el Consello de la Xunta mediante orden, a iniciativa propia o a petición de la consejería o entidad interesada en la afectación.
c) La afectación de los bienes y derechos del patrimonio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia se acordará de oficio por la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio mediante orden, a iniciativa propia o a petición de la consejería o entidad interesada en la afectación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

138.- El artículo 25.1 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) Los bienes y derechos de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia afectados al cumplimiento de los fines y servicios de las consejerías y entidades públicas instrumentales no podrán afectarse a usos o servicios públicos de competencia de otras administraciones públicas, sin transferencia de titularidad ni cambio de su calificación jurídica.
b) Los bienes y derechos de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia afectados al servicio de las consejerías y entidades públicas instrumentales podrán afectarse a otros servicios públicos de competencia de otras administraciones públicas, sin transferencia de titularidad ni cambio de su calificación jurídica.
c) Los bienes y derechos de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia afectados al cumplimiento de los fines o servicios de las consejerías y entidades públicas instrumentales podrán afectarse a servicios públicos de competencia de otras administraciones públicas, con transferencia de titularidad y cambio de su calificación jurídica.
d) Los bienes y derechos de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia afectados al cumplimiento de los fines o servicios de las consejerías y entidades públicas instrumentales podrán afectarse a otros usos o servicios públicos de competencia de otras administraciones públicas, sin transferencia de titularidad ni cambio de su calificación jurídica.

139.- El artículo 35.3 de la Ley orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional dispone:

a) El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.
b) El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo.
c) El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión a trámite.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

140.- El artículo 33.2 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) El uso común privativo está sujeto a autorización o a concesión, si su duración es superior a cuatro años y se efectúa con obras o instalaciones fijas.
b) El uso común especial está sujeto a autorización o a concesión, si su duración es superior a cinco años o se efectúa con obras o instalaciones fijas.
c) El uso común especial está sujeto a autorización o a concesión, si su duración es superior a cuatro años o se efectúa con obras o instalaciones fijas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

141.- El artículo 7.1 de la Ley 3/1993, de 15 de junio, de normalización lingüística dispone que:

a) En el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de justicia.
b) En el ámbito jurisdiccional de Galicia, los ciudadanos y los poderes públicos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de justicia.
c) En el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos, así como los poderes públicos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de justicia.
d) En el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos y los poderes públicos deberán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de justicia.

142.- El artículo 39.4 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) Las autorizaciones demaniales podrán revocarse temporalmente por el órgano que las otorgó por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resultasen incompatibles con condiciones generales aprobadas con posterioridad, produjesen daños en el dominio público, impidiesen la utilización del bien para actividades de mayor interés público o menoscabasen el uso general.
b) Las autorizaciones demaniales pueden revocarse unilateralmente por el órgano que las otorgó en cualquier momento por razones de interés general, sin derecho a indemnización, cuando resultasen incompatibles con condiciones generales, produjesen daños en el dominio público, impidiesen la utilización del bien para actividades de mayor interés público o menoscabasen el uso general.
c) Las autorizaciones demaniales pueden revocarse unilateralmente por el órgano que las otorgó en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resultasen incompatibles con condiciones generales aprobadas con posterioridad, produjesen daños en el dominio público, impidiesen la utilización del bien para actividades de mayor interés público o menoscabasen el uso general.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

143.- El artículo 48.1 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) Los negocios jurídicos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos que graven inmuebles que se inscriban en el registro de la propiedad se formalizarán en escritura pública cuando hayan de ser inscritos en aquél. Los gastos generados serán por cuenta de la parte que solicitara la formalización.
b) Los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles, muebles y los derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos urbanos y demás negocios jurídicos de explotación de muebles e inmuebles que sean susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad se formalizarán en escritura pública cuando vayan a ser inscritos en aquél. Los gastos generados serán de cuenta de la parte que solicite la formalización.
c) Los negocios jurídicos de adquisición de bienes inmuebles o derechos reales se formalizarán por escrito. Los arrendamientos de explotación de inmuebles que sean inscritos en el registro de la propiedad se formalizarán en escritura pública. Los gastos generados serán a cuenta de la parte que solicite la formalización.
d) Los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles que sean susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad se formalizarán en escritura pública cuando vayan a ser inscritos en aquél. Los gastos generados serán de cuenta de la parte que solicitara la citada formalización.

144.- El artículo 50.1 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia dispone que:

a) En la Administración especial de la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia para adquirir a título oneroso o gratuito bienes inmuebles y derechos reales corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio.
b) En la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles y derechos sobre los mismos corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio.
c) En la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia la capacidad para adquirir a título oneroso bienes inmuebles y derechos reales corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

145.- ¿Cuál de los siguientes es según el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de Galicia un órgano superior en materia de función pública?

a) El director o directora general de la Función Pública.
b) La Mesa General de Negociación de la Función Pública
c) El Consejo Gallego de la Función Pública
d) El Consejo Consultivo de la Función Pública.

146.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto Básico del Empleado Público ¿las Administraciones Públicas podrán asignarle a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñan?:

a) No.

b) Sí, siempre que existan razones de urgencia y necesidad y se tramite el procedimiento previsto para tal efecto.
c) Sí, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

147.-En el artículo 66 del Estatuto Básico del Empleado Público se dispone que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial para cargo público, cuando haya adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce:

a) La pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cuerpos que tuviera.
b) La pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
c) La suspensión de la condición de funcionario durante el tiempo que se determine en la sentencia.
d) La separación del servicio durante el tiempo que se determine en la sentencia.

148.-Cuál de los siguientes conceptos del complemento salarial de singularidad del puesto no se recoge en el Convenio Colectivo Único para el personal laboral:

a) Especial dedicación
b) Jornada especial
c) Responsabilidad
d) Dirección.

149.- Según la Ley 12/2006, de 1 diciembre, de fundaciones de interés gallego, el patronato como órgano colegiado de gobierno y de representación de la fundación estará integrado por el número de miembros que determinen sus estatutos, con:

a) Un mínimo de tres miembros, incluido su presidente.
b) Un mínimo de cinco miembros, incluido su presidenta/-e.
c) Un mínimo de cinco miembros, incluido su presidenta/-e y la/el secretaria/-o.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

150.- Según el artículo 31. 3 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, las primeras papeletas confeccionadas se entregarán:

a) a la Xunta de Galicia para su envío a los residentes ausentes que viven en el extranjero.
b) al Ministerio de Asuntos Exteriores para su envío a los residentes ausentes que viven en el extranjero.
c) A la Junta Electoral de Galicia para su envío a los residentes ausentes que viven en el extranjero.
d) a la Delegación del Gobierno para su envío a los residentes ausentes que viven en el extranjero.

PREGUNTAS DE RESERVA

151.- El artículo 20.1 letras a y b de la Ley 50/1997, del Gobierno, indica que pueden delegar el ejercicio de competencias propias:

a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.
b) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y del Ministro de la Presidencia. Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.
c) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros. Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.
d) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros. Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los Directores Generales del Ministerio.

152.- La Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia, establece que la condición de consejero podrá ser compatible con:

a) El ejercicio de la actividad docente o investigadora.
b) Cualquier cargo político del Estado, comunidades autónomas o entidades locales.
c) Funciones directivas en sindicatos de trabajadores o asociaciones de empresarios.
d) El ejercicio de la abogacía.

153.-El artículo 135.2 de la Constitución Española dispone:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrán incurrir en un déficit presupuestario que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
b) El Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un déficit equilibrado que no supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
c) El Estado, las Comunidades Autónomas y demás Administraciones Públicas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea por ley para sus Estados Miembros.
d) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE FACENDA
Dirección Xeral da Función Pública

empregarse
procesos de ingreso

Proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia (subgrupo A1)

Primeiro exercicio (acceso libre)

NON abra o exame ata que o tribunal llo indique

1.- Segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de12 de maio do Tribunal de Contas, a instrución dos procedementos de reintegro por alcance efectuarase previo nomeamento:

a) Polo presidente da Sala de enjuiciamiento que coñeza do asunto.
b) Por funcionario do propio Tribunal de Contas que disporá de tres días para renunciar ao nomeamento.
c) Por funcionarios públicos que presten servizos na provincia en que ocorran os actos que poidan constituír alcance.
d) Por un conselleiro de Contas integrante da Comisión de Goberno, na forma que determine a Lei de Funcionamento do Tribunal.

2.- Segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, de12 de maio do Tribunal de Contas, corresponde o exercicio da potestade disciplinaria nos casos de faltas moi graves respecto do persoal ao servizo do Tribunal:

a) Ao Presidente do Tribunal.
b) Á secretaría xeral do Tribunal.
c) Á Comisión de Goberno.
d) Ao Pleno do Tribunal.

3.- A cuestión de ilegalidade exporase segundo o artigo 123 da Lei 29/1998 de 13 de xullo reguladora da xurisdición contencioso-administrativa:

a) O Xuíz ou Tribunal exporá, mediante auto, a cuestión de ilegalidade prevista no artigo 27.1 dentro dos oito días seguintes, sen que conste nas actuacións a firmeza da sentenza.
b) O Xuíz ou Tribunal exporá, mediante auto, a cuestión de ilegalidade prevista no artigo 27.1 dentro dos cinco días seguintes a que conste nas actuacións a firmeza da sentenza.
c) O Tribunal exporá, mediante auto, a cuestión de ilegalidade prevista no artigo 27.1 dentro dos dez días seguintes a que conste nas actuacións a firmeza da sentenza.
d) Os Tribunais exporán, mediante auto, a cuestión de ilegalidade prevista no artigo 27.1 dentro dos cinco días seguintes aínda que non conste nas actuacións a firmeza da sentenza.

4.- Segundo o artigo 15. 1 da Lei 50 /1997, do Goberno, os Secretarios de Estado son nomeados e separados:

a) por Orde Ministerial, previo coñecemento do Consello de Ministros.
b) por Real Decreto do Consello de Ministros, aprobado a proposta do Presidente do Goberno ou do membro do Goberno a cuxo Departamento pertenzan.
c) por Real Decreto do Presidente do Goberno, aprobado a proposta do membro do Goberno a cuxo Departamento pertenzan.
d) por Real Decreto do Presidente do Goberno, previo coñecemento do Consello de Ministros.

5.- O artigo 55 da Constitución Española de 1978 establece que cando se acorde a declaración do estado de excepción ou de sitio, poderán ser suspendidos:

a) os dereitos recoñecidos nos artigos 17, 18 apartados 2 e 3, artigos 19, 20 apartados 1.a) e d), e 5, artigos 21, 28 apartado 2 e artigo 37 apartado 2.

b) os dereitos recoñecidos nos artigos 17, 18 apartados 2 e 3, artigos 19, 20 apartados 1.a) e d), e 5, artigos 21, 28 apartado 2 e artigo 38 apartado 2.

c) os dereitos recoñecidos nos artigos. 17, 18 apartados 2 e 3, artigos 19, 20 apartados 1.a) e d), e 5, artigos 21, 28 apartado 2 e artigo 37 apartado 3.

d) os dereitos recoñecidos nos artigos 17, 18 apartados 2 e 3, artigos 19, 20 apartados 1.a) e d), e 5, artigos 21, 28 apartado 3 e artigo 37 apartado 2.

6.-Segundo indica o artigo 6.4. d da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, o mandato dos Deputados do Parlamento de Galicia é compatible co desempeño de actividades privadas, salvo no seguinte suposto:

a) a participación superior ao 15 %, adquirida en todo ou en parte, con posterioridade á data da súa elección como Deputado, agás que sexa por herdanza, en Empresas ou Sociedades que teñan concertos de obras, servizos ou subministracións con Entidades do sector público.
b) a participación superior ao 10 %, adquirida en todo ou en parte, con posterioridade á data da súa elección como Deputado, agás que sexa por herdanza, en Empresas ou Sociedades que teñan concertos de obras, servizos ou subministracións con Entidades do sector público.
c) a participación superior ao 15 %, adquirida en todo ou en parte, con posterioridade á data da súa elección como Deputado, agás que sexa por herdanza, en Empresas ou Sociedades que teñan concertos de obras, servizos ou subministracións con Entidades do sector público de Galicia.
d) a participación superior ao 10 %, adquirida en todo ou en parte, con posterioridade á data de formalización da súa candidatura como Deputado, agás que sexa por herdanza, en Empresas ou Sociedades que teñan concertos de obras, servizos ou subministracións con Entidades do sector público.

7.- ¿Cal das seguintes afirmacións é falsa?:

a) Toda persoa natural ou xurídica que invoque un interese lexítimo poderá dirixirse ao Valedor do Pobo sen ningunha restrición nin limitación.
b) Os deputados, individualmente, os grupos parlamentarios e as comisións do Parlamento de Galicia poderán solicitar a intervención do Valedor do Pobo en todas as cuestións atribuídas á súa competencia.
c) A Comisión de Peticións poderá transmitirlle ademais as que reciba nos termos do artigo 48 do Regulamento do Parlamento Galego.
d) Ningunha autoridade administrativa, no ámbito da súa competencia, poderá presentar queixas ante o Valedor do Pobo.

8.- Segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, esta:

a) Regula o tratamento dos datos de carácter persoal rexistrados en soporte físico que os

faga susceptibles de tratamento automatizado.
b) Regula o tratamento dos datos de carácter persoal rexistrado en soporte físico de persoas físicas ou xurídicas que os faga susceptibles de tratamento automatizado.
c) Regula o tratamento dos datos de carácter persoal rexistrados en soporte físico que os faga susceptibles de tratamento.
d) Regula o tratamento dos datos de carácter persoal rexistrados en soporte físico que os faga susceptibles de tratamento automatizado, e a toda modalidade de uso posterior destes datos.

9.- Segundo o previsto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o tratamento de datos de carácter persoal que fagan referencia á saúde:

a) Requirirá consentimento tácito do afectado.
b) Requirirá consentimento expreso do afectado.
c) Requirirá consentimento expreso e por escrito do afectado.
d) Non requirirá consentimento cando devandito tratamento sexa necesario para o diagnóstico médico.

10.- Segundo o artigo 29, 2, da lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa cando a Administración non execute os seus actos firmes:

a) Os interesados solicitarán o seu cumprimento mediante un escrito presentado ao efecto. Se a execución non se produce no prazo dun mes, poderán os solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará polo procedemento ordinario.
b) Os afectados, se no prazo de tres meses desde a data da reclamación, a Administración non dese cumprimento ao solicitado, estes poden deducir recurso contencioso-administrativo contra a inactividade da Administración.
c) Poderán os afectados solicitar a súa execución, e se esta non se produce no prazo dun mes desde tal petición, poderán os solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará polo procedemento abreviado regulado no artigo 78.
d) Ningunha das anteriores é unha resposta correcta.

11.- Segundo o artigo 139.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo reguladora da xurisdición contencioso-administrativa:

a) En primeira instancia, o órgano xurisdiccional, ao ditar sentenza ou ao resolver por auto os recursos ou incidentes que ante o mesmo promovérense, imporá as costas á parte que non vexa rexeitadas todas as súas pretensións, salvo que aprecie e así o razoe, que o caso non presentaba serias dúbidas de feito ou de dereito.
Nos supostos de estimación ou desestimación parcial das pretensións, cada parte abonará as costas causadas na instancia, salvo que o órgano xurisdiccional, razoándoo debidamente, impóñaas a unha delas por soster a súa acción ou interposto o recurso con mala fe ou temeridade.
b) En primeira ou única instancia, o órgano xurisdiccional, ao ditar sentenza ou ao resolver por auto os recursos ou incidentes que ante o mesmo promovérense, imporá as costas á parte que vexa rexeitadas todas as súas pretensións, salvo que aprecie e así o razoe, que o caso presentaba serias dúbidas de feito ou de dereito.
Nos supostos de estimación ou desestimación parcial das pretensións, cada parte

abonará as costas causadas á súa instancia e as comúns por metade, salvo que o órgano xurisdiccional, razoándoo debidamente, impóñaas a unha delas por soster a súa acción ou interposto o recurso con mala fe ou temeridade.
c) En primeira ou única instancia, o órgano xurisdiccional, ao ditar sentenza ou ao resolver por auto os recursos ou incidentes que ante o mesmo promovérense, imporá as costas á parte que vexa rexeitadas todas as súas pretensións, salvo que aprecie e así o razoe, que o caso presentaba serias dúbidas de feito ou de dereito.
No entanto o disposto no parágrafo anterior, imporanse as costas á parte cuxas pretensións sexan desestimadas cando doutro xeito faríase perder ao recurso a súa finalidade.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

12.- No artigo 5.1 do Real decreto 1398/1993 do Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora disponse que:

a) O órgano competente resolverá a non exigibilidad de responsabilidade administrativa en calquera momento da instrución dos procedementos sancionadores en que quede acreditado que recaeu sanción penal ou administrativa sobre os mesmos feitos, sempre que concorra, ademais, identidade de suxeito, feito e fundamento.
b) O órgano competente resolverá a exigibilidad de responsabilidade administrativa en calquera momento da instrución dos procedementos sancionadores en que quede acreditado que xa recaeu sanción penal ou administrativa sobre os mesmos feitos, sempre que concorra, ademais, identidade de suxeito, feito e fundamento.
c) O órgano competente resolverá a non exigibilidad de responsabilidade administrativa en calquera momento da instrución dos procedementos sancionadores en que quede acreditado que recaeu sanción penal ou administrativa sobre os mesmos feitos, sempre que concorra, ademais, identidade de suxeito e fundamento.
d) O órgano competente resolverá a non exigibilidad de responsabilidade administrativa no momento anterior á instrución dos procedementos sancionadores en que quede acreditado que recaeu sanción penal ou administrativa sobre os mesmos feitos, sempre que concorra, ademais, identidade de suxeito, feito e fundamento.

13.- Segundo o artigo 4 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, quedan excluídas do ámbito material de aplicación da lei:

a) As prestacións autonómicas de carácter asistencial.
b) As subvencións aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia.
c) As subvencións concedidas en virtude de razóns de interese público, social, económico ou humanitario.
d) Todas as anteriores son correctas.

14.- Segundo o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a difusión a través do perfil do contratante da información relativa aos procedementos de adxudicación fornecerá os efectos previstos:

a) No Título II.
b) No Título I do Libro V.
c) No Título I do Libro III.
d) No Título II do Libro II.

15.- No Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público establécese que a renuncia á celebración do contrato ou o desistimiento do procedemento só deberá acordarse:

a) Pola mesa de contratación, que o deberá facer público no Perfil de Contratante.
b) Pola mesa de contratación, logo da adxudicación.
c) Polo órgano de contratación logo de haberse adxudicado e indemnizado aos licitadores polos danos e prexuízos causados.
d) Polo órgano de contratación antes da adxudicación.

16.- Segundo establécese no artigo 31 da Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de riscos laborais para poder actuar como servizos de prevención, as entidades especializadas deberán ser obxecto:

a) De contratación administrativa previo informe dos Delegados de prevención.
b) De autorización administrativa polo órgano competente en materia de seguridade da Administración Pública correspondente.
c) De autorización administrativa polos órganos competentes en materia laboral e sanitaria das Administracións Públicas correspondentes.
d) Dunha acreditación pola autoridade laboral, que será única e con validez en todo o territorio español.

17.-O artigo 21 do Real decreto 1398/1993 do Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora dispón respecto dos efectos da resolución que:

a) As resolucións que poñan fin á vía administrativa serán inmediatamente executivas e contra as mesmas non poderá interporse recurso administrativo ordinario.
b) As resolucións que non poñan fin á vía administrativa serán inmediatamente executivas e contra as mesmas non poderá interporse recurso administrativo ordinario.
c) As resolucións que non poñan fin á vía administrativa non serán inmediatamente executivas e contra as mesmas poderá interporse recurso administrativo ordinario.
d) As resolucións que poñan fin á vía administrativa non serán inmediatamente executivas e contra as mesmas poderá interporse recurso administrativo ordinario.

18.- Segundo o artigo 16 da Lei orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas, o Fondo de Compensación distribuirase de conformidade ao establecido na o artigo 74.2 da Constitución, entre Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía:

a) Polo Consello de Política Fiscal e Financeira.
b) Polas Cortes Xerais.
c) Polo Ministro de Economía.
d) Polo Consello de Ministros.

19.- Segundo despréndese do artigo 15 da Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de riscos laborais, o empresario aplicará as medidas que integran o deber xeral de prevención, con arranxo, entre outros principios xerais, ao seguinte:

a) Identificar os riscos
b) Definir os riscos

c) Evitar os riscos
d) Identificar e minimizar os riscos que poidan existir

20.- No artigo 103 apartado 4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público sinálase que a garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores:

a) Logo da extinción do contrato.
b) Logo da adxudicación do contrato.
c) Á finalización do contrato.
d) Logo de formalizado o contrato.

21.- No artigo 172 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público disponse que ademais dos supostos previstos no artigo 170, poderá acudirse ao procedemento negociado para adxudicar contratos de servizos públicos, entre outros casos, nos seguintes:
a) Nos de xestión de servizos públicos cuxo orzamento de gastos de primeiro establecemento prevéxase inferior a 50.000 euros e o seu prazo de duración sexa inferior a cinco anos.
b) Nos de xestión de servizos públicos cuxo orzamento de gastos de primeiro establecemento prevéxase inferior a 100.000 euros e o seu prazo de duración sexa inferior a dez anos.
c) Nos de xestión de servizos públicos cuxo orzamento de gastos de primeiro establecemento prevéxase inferior a 100.000 euros e o seu prazo de duración sexa inferior a cinco anos.
d) Os de xestión de servizos cuxo orzamento de gastos de primeiro establecemento prevéxase inferior a 500.000 euros e o seu prazo de duración sexa inferior a cinco anos.

22.- Segundo o previsto no Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, as provisións de fondos de carácter permanente para a atención de gastos periódicos ou repetitivos, teñen o carácter de:

a) Operacións extrapresupuestarias.
b) Pagos a xustificar.
c) Anticipos de Tesourería
d) Débeda de Tesourería.

23.- De conformidade co previsto no artigo 4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, as Administracións públicas actúan e relaciónanse ponderando, no exercicio das competencias propias, a totalidade dos intereses públicos implicados e, en concreto, aqueles cuxa xestión estea encomendada ás outras Administracións, de acordo co principio de:

a) Lealdade institucional.
b) Xerarquía.
c) Descentralización e desconcentración.
d) Coordinación.

24.- Segundo o artigo 26 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ¿poderá ser obxecto de deliberación ou acordo algún asunto que non figure incluído na orde do día da reunión dun órgano colexiado?:

a) Si, cando o estableza o réxime propio de convocatorias do órgano colexiado.
b) Si, cando estean presentes todos os membros do órgano colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría.
c) Si, cando na reunión estea presente o Presidente e Secretario e a metade polo menos dos membros do órgano colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable de todos eles.
d) Todas as respostas anteriores son falsas.

25.- De conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a Administración está obrigada a ditar resolución expresa:

a) En todos os procedementos e a notificala calquera que sexa a súa forma de iniciación.
b) En todos os procedementos iniciados a instancia de parte.
c) En todos os procedementos, excepto nos casos de desistimiento da solicitude ou de desaparición sobrevinda do obxecto do procedemento.
d) En todos os procedementos, excepto nos casos de prescrición ou caducidade do procedemento.

26.- Aos efectos de cómputo de prazos e segundo o establecido no artigo 48 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, cando un día fose inhábil no municipio en que residise o interesado:

a) Considerarase hábil se na sede do órgano administrativo o día ten a condición de hábil.
b) Considerarase hábil se permanece aberto o rexistro do órgano competente para a súa tramitación.
c) As respostas a) e b) son correctas.
d) Considerarase inhábil en todo caso.

27.- Segundo o artigo 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sinale cal das seguintes afirmacións é incorrecta:

a) A publicación substituirá á notificación fornecendo as súas mesmos efectos cando o acto teña por destinatario a unha pluralidade indeterminada de persoas.
b) A publicación substituirá á notificación fornecendo as súas mesmos efectos cando a Administración estime que a notificación efectuada a un só interesado é insuficiente para garantir a notificación a todos.
c) A publicación substituirá á notificación fornecendo as súas mesmos efectos cando se trata de actos integrantes dun procedemento selectivo ou de concorrencia competitiva de calquera tipo.
d) A publicación substituirá á notificación fornecendo as súas mesmos efectos cando o interesado ou o seu representante rexeitase a notificación dunha actuación

administrativa.
28.- Segundo o artigo 111 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sinale cal das seguintes afirmacións é correcta:

a) Antes da iniciación do procedemento administrativo, o órgano competente, a instancia de parte, nos casos de urxencia e para a protección provisional dos intereses implicados, poderá adoptar as medidas provisionais correspondentes.
b) Iniciado o procedemento, o órgano administrativo competente para resolvelo, poderá adoptar, a instancia de parte, as medidas provisionais que estime oportunas.
c) O órgano a quen competa resolver o recurso, poderá suspender, a solicitude do recorrente, a execución do acto impugnado cando concorran determinadas circunstancias.
d) O órgano administrativo que teñan expresamente atribuída a potestade sancionadora poderá proceder mediante acordo motivado á adopción de medidas de carácter provisional que aseguren a eficacia da resolución final que puidese recaer.

29.- Na organización da actividade das entidades que integran o sector público autonómico, o artigo 4 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, contempla expresamente que se observará o principio de:

a) Desconcentración e coordinación.
b) Boa fe e confianza lexítima.
c) Proximidade aos cidadáns.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

30.- Na elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral, a Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, dispón que o anteproxecto non ten que ir acompañado de:

a) Unha memoria justificativa sobre a súa legalidade, o seu acerto e a súa oportunidade, así como sobre as modificacións e innovacións que contén.
b) Un informe económico-financeiro da consellería competente en materia de facenda.
c) O informe do servizo xurídico correspondente da consellería.
d) Unha táboa de vixencias.

31.- Segundo o artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, no marco do Estatuto correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva da seguinte materia:

a) Montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias, pastos, sen prexuízo do disposto no art. 149.1.13 da Constitución.
b) Obras públicas que non teñan a cualificación legal de interese do Estado, aínda que a súa execución ou explotación afecte a outra Comunidade Autónoma ou provincia.
c) Os centros de contratación de mercancías ou valores, en conformidade coas normas xerais de Dereito Mercantil.
d) A promoción e ordenación do turismo dentro e fóra da Comunidade.

32.- O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 consta dun total de:

a) 57 artigos, 4 disposicións adicionais e 7 disposicións transitorias.
b) 56 artigos, 2 disposicións adicionais e 7 disposicións transitorias.
c) 56 artigos, 3 disposicións adicionais e 4 disposicións transitorias.
d) 54 artigos, 3 disposicións adicionais e 5 disposicións transitorias.

33.- Segundo o artigo 45 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, o Parlamento pode esixir a responsabilidade política da Xunta e o seu presidente mediante a adopción por maioría absoluta da moción de censura. Devandita moción:

a) non poderá ser votada ata que transcorran cinco días desde a súa presentación. Nos dous primeiros días de devandito prazo poderán presentarse mocións alternativas.
b) non poderá ser votada ata que transcorran cinco días desde a súa presentación. Nos tres primeiros días de devandito prazo poderán presentarse mocións alternativas.
c) non poderá ser votada ata que transcorran seis días desde a súa presentación. Nos dous primeiros días de devandito prazo poderán presentarse mocións alternativas.
d) non poderá ser votada ata que transcorran seis días desde a súa presentación. Nos tres primeiros días de devandito prazo poderán presentarse mocións alternativas.

34.-Segundo o artigo 5 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,

a) a Xunta reúnese en Consello, que someterá o seu funcionamento aos principios de unidade, colegialidad, eficacia e participación.
b) a Xunta reúnese en Consello, que someterá o seu funcionamento aos principios de unidade, colegialidad, participación e coordinación.
c) a Xunta reúnese en Consello, que someterá o seu funcionamento aos principios de unidade, eficacia, participación e coordinación.
d) a Xunta reúnese en Consello, que someterá o seu funcionamento aos principios de unidade, colegialidad, xerarquía e coordinación.

35.- De acordo co artigo 37. 1 c da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, adoptarán a forma de Decreto:

a) as resolucións do presidente da Xunta, nos supostos contemplados no parágrafo 1 do artigo 24, e nos números 1 e 7 do artigo 26 desta Lei.
b) as resolucións do presidente da Xunta, nos supostos contemplados no parágrafo 2 do artigo 26, e nos números 1 e 7 do artigo. 24 desta Lei.
c) as resolucións do presidente da Xunta, nos supostos contemplados no parágrafo 2 do artigo 24 , e nos números 1 e 7 do artigo 26 desta Lei.
d) as resolucións do presidente da Xunta, nos supostos contemplados no parágrafo 2 do artigo 24, e nos números 1 a 7 do artigo 26 desta Lei.

36.- Segundo o artigo 14.1 da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, o Tribunal en pleno pode adoptar acordos cando estean presentes, polo menos:

a) dous terzos dos membros que en cada momento o compoñan.

b) A maioría dos membros que en cada momento o compoñan.
c) Tres quintos dos membros que en cada momento o compoñan.
d) A maioría absoluta dos membros que en cada momento o compoñan.

37.- Poderán dar lugar á formulación dos conflitos en defensa da autonomía local, de acordo co artigo 75 bis da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional,

a) as leis do Estado ou das Comunidades autónomas que lesionen a autonomía constitucionalmente garantida.
b) as leis do Estado que lesionen a autonomía constitucionalmente garantida.
c) as normas do Estado ou das Comunidades autónomas que lesionen a autonomía local constitucionalmente garantida.
d) as normas do Estado con rango de lei ou as disposicións con rango de lei das Comunidades autónomas que lesionen a autonomía local constitucionalmente garantida.

38.- Aprobar, cando cumpra, as medidas para garantir os servizos mínimos nos casos de exercicio do dereito de folga polo persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma, é unha función que lle corresponde

a) Ao Consello da Xunta de Galicia.
b) Ao presidente da Xunta de Galicia.
c) Ao conselleiro competente en materia de función pública de Galicia.
d) Ao director ou directora xeral da Función Pública de Galicia.

39.- Determinar os requisitos obxectivos para a adquisición dos graos superiores dentro de cada corpo ou escala, que se fundarán exclusivamente en criterios de mérito e capacidade, é unha función que lle corresponde:
a) Á Comisión de Persoal.
b) Ao conselleiro ou conselleira competente en materia de función pública.
c) Aos conselleiros ou conselleiras.
d) Ao Consello da Xunta de Galicia.

40.- O Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia contempla no seu artigo 31 a reasignación de efectivos

a) Como unha comisión de servizos de carácter obrigatorio.
b) Como unha medida de fomento do emprego.
c) Como unha previsión e medida que poderá conterse nos plans de emprego.
d) Como unha previsión e medida que poderá conterse nos concursos de traslados.

41.- De acordo co artigo 37 do Estatuto Básico do Empregado Público, quedan excluídas da obrigatoriedade de negociación as seguintes materias

a) Os criterios xerais de acción social.
b) As normas que fixan os criterios e mecanismos xerais en materia de avaliación do desempeño.
c) Os plans de Previsión Social Complementaria.
d) A regulación e determinación concreta, en cada caso, dos sistemas, criterios, órganos e procedementos de acceso ao emprego público e a promoción profesional.

42.- Segundo a Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado, a Administración Xeral do Estado organízase e actúa, con pleno respecto ao principio de legalidade, e de acordo cos outros principios de organización que a continuación se mencionan:

a) Programación e desenvolvemento de obxectivos e control da xestión e dos resultados.
b) Racionalización e axilidade dos procedementos administrativos e das actividades materiais de xestión.
c) Cooperación e coordinación coas outras Administracións públicas.
d) Simplicidad, claridade e proximidade aos cidadáns.

43.- De conformidade coa Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado, na organización central son órganos directivos:

a) Os Secretarios de Estado e os Subsecretarios.
b) Os Secretarios xerais técnicos e Directores xerais.
c) Os Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

44.- Conforme á Lei 9/1995, de 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia, o ditame do Consello será solicitado:

a) En asuntos de competencia da Xunta de Galicia, pola súa Presidencia.
b) Pola/o Conselleira /-o ou pola/o Secretaria/o Xeneral-Técnico, en asuntos competencia da súa consellería.
c) Polas/os Delegadas/-os Territoriais e polas/os presidentas/-es das entidades locais naqueles supostos en que a lexislación requírao.
d) Todas as respostas son correctas.

45.- Nas reunións do Pleno do Consello Consultivo de Galicia, os acordos sobre ditames preceptivos tomaranse por:

a) Maioría absoluta dos membros que constitúan o Consello.
b) Maioría simple dos membros que constitúan o Consello.
c) Maioría absoluta dos membros electos que constitúan o Consello.
d) Maioría simple dos membros electos que constitúan o Consello.

46.- Segundo o previsto nos artigos 47 e 60 de Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, constitúen unha excepción ao principio de anualidade orzamentaria:

a) A imputación de obrigacións recoñecidas ata o 31 de decembro do correspondente exercicio.
b) A imputación de compromisos de gasto de investimento debidamente adquiridos en exercicios anteriores.
c) A imputación de obrigacións que teñan a súa orixe en sentenzas xudiciais.
d) Todas as anteriores son correctas.

47.- Segundo o previsto nos artigos 99 e 100 do Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,

a) Se a Intervención manifestásese en desacordo co fondo ou coa forma dos actos, expedientes ou documentos examinados, deberá formular o correspondente reparo, que deberá ser motivado e conter todas as obxeccións realizadas ao expediente.
b) Se os reparos afectan á autorización e disposición de gastos e á liquidación de dereitos, orixinarase a suspensión da tramitación do expediente, ata que aqueles non sexan emendados cando se omitan o expediente requisitos ou trámites que se consideren esenciais a xuízo da Intervención.
c) Se os reparos afectan á autorización e disposición de gastos e ao recoñecemento de dereitos, orixinarase a suspensión da tramitación do expediente ata que aqueles non sexan emendados cando se omitan o expediente requisitos ou trámites que se consideren esenciais a xuízo da Intervención ou cando esta estime que a continuación do procedemento puidese causar quebras económicas á Comunidade Autónoma.
d) Se os reparos afectan á autorización e disposición de gastos, ao recoñecemento de obrigacións ou ao ordenamento de pagos, orixinarase a suspensión da tramitación do expediente ata que aqueles non sexan emendados cando se omitan o expediente requisitos ou trámites que se consideren esenciais a xuízo da Intervención ou cando esta estime que a continuación do procedemento puidese causar quebras económicas á Comunidade Autónoma.

48.- Segundo o previsto no artigo 25 do Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, se para o cumprimento das resolucións que determinen obrigacións a cargo da Comunidade ou dos seus organismos autónomos, non existise crédito no orzamento en vigor,

a) Solicitarase do Parlamento, dentro dos tres meses seguintes á notificación da resolución, a concesión dun crédito extraordinario ou dun suplemento de crédito.
b) Solicitarase do Parlamento, dentro dos tres meses seguinte á notificación da resolución, a concesión dun crédito extraordinario.
c) Solicitarase do Parlamento, dentro do mes seguinte á notificación da resolución, a concesión dun crédito extraordinario ou dun suplemento de crédito.
d) Solicitarase do Parlamento, dentro dos tres meses seguintes á notificación da resolución, a concesión dun suplemento de crédito.

49.- Segundo o previsto na lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal, o réxime de protección de datos que se establece nesta lei non será de aplicación, sen prexuízo da comunicación da súa existencia, as súas características xerais e a súa finalidade á Axencia Española de Protección de Datos:

a) Aos ficheiros derivados do Rexistro Civil e do rexistro Central de penados e rebeldes.
b) Aos procedentes de imaxes e sons obtidos mediante a utilización de videocámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade.
c) Aos ficheiros establecidos para a investigación do terrorismo e formas graves de delincuencia organizada.
d) Aos que teñan por obxecto o almacenamento dos datos contidos nos informes persoais de cualificación a que se refire a lexislación do réxime do persoal das Forzas

Armadas.

50.- Segundo o previsto no artigo 29 da lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, considérase gasto realizado:

a) Aquel que se execute no prazo establecido polas diferentes bases reguladoras das subvencións.
b) Aquel que se execute no prazo establecido polas diferentes bases reguladoras das subvencións e responda á natureza da actividade subvencionada.
c) Aquel que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación determinado pola normativa reguladora da subvención.
d) Todas son correctas.

51.- Segundo o previsto no artigo 31 da lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sobre o procedemento de aprobación do gasto e pago.

a) A resolución de concesión da subvención levará consigo a aprobación do gasto correspondente.
b) Non poderán outorgarse subvencións por contía superior á que se determine na convocatoria sen que se realice unha nova convocatoria, salvo que se produza o incremento dos créditos derivado dunha xeración, ampliación, transferencia ou incorporación de crédito.
c) Non poderá realizarse o pago da subvención en tanto o beneficiario non se atope ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social e non teña pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma.
d) Todas as respostas son correctas.

52.- Segundo o previsto na lei 6/1985 de 24 de xuño do Consello de Contas,

a) Non poderán ser designados Conselleiros de Contas quen exerzan funcións directivas ou executivas en centrais sindicais.
b) Non poderán ser designados Conselleiros de Contas os perceptores de subvencións con cargo a fondos públicos.
c) Se é nomeado conselleiro de contas un Deputado do Parlamento de Galicia, antes de tomar posesión, deberá renunciar ao seu cargo ou función.
d) Todas son correctas.

53.- Segundo o art. 3 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa non corresponden á orde xurisdiccional contencioso-administrativo:

a) 1.As cuestións expresamente atribuídas ás ordes xurisdiccionais civil, penal e social, aínda que estean relacionadas coa actividade da Administración pública. 2. O recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Os conflitos de xurisdición entre os Xulgados e Tribunais e a Administración pública e os conflitos de atribucións entre órganos dunha mesma Administración. 4. Os recursos directos ou indirectos que se interpoñan contra as Normas Forais fiscais do Dereito de Navarra.

b) 1.As cuestións non expresamente atribuídas ás ordes xurisdiccionais civil, penal e

social, aínda que estean relacionadas coa actividade da Administración pública. 2. O recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Os conflitos de xurisdición entre os Xulgados e Tribunais e a Administración pública e os conflitos de atribucións entre órganos de distinta Administración. 4. Os recursos directos ou indirectos que se interpoñan contra as Normas Forais fiscais das Xuntas Xerais dos Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa e Biscaia, que corresponderán, en exclusiva, ao Tribunal Constitucional. nos termos establecidos pola disposición adicional quinta da súa Lei Orgánica.

c) 1.As cuestións expresamente atribuídas ás ordes xurisdiccionais civil, penal e social, aínda que estean relacionadas coa actividade da Administración pública. 2. O recurso contencioso-disciplinario militar. 3. Os conflitos de xurisdición entre os Xulgados e Tribunais e a Administración pública e os conflitos de atribucións entre órganos dunha mesma Administración. 4. Os recursos directos ou indirectos que se interpoñan contra as Normas Forais fiscais das Xuntas Xerais dos Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa e Biscaia, que corresponderán, en exclusiva, ao Tribunal Constitucional. nos termos establecidos pola disposición adicional quinta da súa Lei Orgánica.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

54.- O artigo 45.3 da Lei 29/1998 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, dispón que:

a) O Xuíz examinará de oficio a validez da comparecencia axiña que como se presentou o escrito de interposición. Se estima que é válida, admitirá a trámite o recurso. Se co escrito de interposición non se acompañan os documentos expresados no apartado anterior ou os presentados son incompletos e, en xeral, sempre que estime que non concorren os requisitos esixidos por esta Lei para a validez da comparencia, requirirá inmediatamente a subsanación dos mesmos, sinalando un prazo de dez días para que o recorrente poida levala a efecto e, se non o fixer, o Xuíz pronunciarase sobre o arquivo das actuacións.
b) O Secretario xudicial examinará de oficio a validez da comparecencia axiña que como se presentou o escrito de interposición. Se estima que é válida, admitirá a trámite o recurso. Se co escrito de interposición non se acompañan os documentos expresados no apartado anterior ou os presentados son incompletos e, en xeral, sempre que o Secretario xudicial estime que non concorren os requisitos esixidos por esta Lei para a validez da comparencia, requirirá inmediatamente a subsanación dos mesmos, sinalando un prazo de dez días para que o recorrente poida levala a efecto e, se non o fixer, o Xuíz ou Tribunal pronunciarase sobre o arquivo das actuacións.
c) Examinarase de oficio a validez da comparecencia axiña que como se presentou o escrito de interposición. Se se estima que é válida, admitirase a trámite o recurso. Se co escrito de interposición non se acompañan os documentos expresados no apartado anterior ou os presentados son incompletos e, en xeral, sempre que estime que non concorren os requisitos esixidos por esta Lei para a validez da comparencia, o Tribunal requirirá inmediatamente a subsanación dos mesmos, sinalando un prazo de dez días para que o recorrente poida levala a efecto e, se non o fixer, o Tribunal pronunciarase sobre o arquivo das actuacións.
d) O Secretario xudicial examinará, a instancia de parte interesada, a validez da comparecencia axiña que como se presentou o escrito de interposición. Se estima que é válida, admitirá a trámite o recurso. Se co escrito de interposición non se acompañan os

documentos expresados no apartado anterior ou os presentados son incompletos e, en xeral, sempre que o Secretario xudicial estime que non concorren os requisitos esixidos por esta Lei para a validez da comparencia, requirirá inmediatamente a subsanación dos mesmos, sinalando un prazo de dez días para que o recorrente poida levala a efecto e, se non o fixer, o Secretario xudicial pronunciarase sobre o arquivo das actuacións.

55.- O artigo 65.2 da Lei 29/1998, de 13 de xullo reguladora da xurisdición contencioso-administrativa dispón que:

a) Cando o Xuíz ou Tribunal xulgue oportuno que no acto da vista ou nas conclusións trátense motivos relevantes para o fallo e distintos dos alegados, porao en coñecemento das partes mediante auto, dándolles prazo de dez días para ser oídas sobre iso. Contra este auto non caberá recurso algún.
b) Cando o Xuíz ou Tribunal xulgue oportuno que no acto da vista ou nas conclusións trátense motivos relevantes para o fallo e distintos dos alegados, porao en coñecemento das partes mediante providencia, dándolles prazo de quince días para ser oídas sobre iso. Contra esta providencia non caberá recurso.
c) Cando o Xuíz ou Tribunal xulgue oportuno que no acto da vista ou nas conclusións non se traten motivos relevantes para o fallo e distintos dos alegados, porao en coñecemento das partes mediante providencia, dándolles prazo de quince días para ser oídas sobre iso. Contra esta providencia caberá recurso.
d) Cando o Xuíz ou Tribunal xulgue oportuno que no acto da vista ou nas conclusións trátense motivos relevantes para o fallo e distintos dos alegados, porao en coñecemento das partes mediante providencia, dándolles prazo de dez días para ser oídas sobre iso. Contra esta providencia non caberá recurso algún.

56.- O artigo 13 do Real decreto 1398/1993 do Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora dispón que a iniciación dos procedementos sancionadores formalizaranse co contido mínimo seguinte:

a) 1. Identificación da persoa ou persoas responsables. 2. Os feitos sucintos que motivan a incoación do procedemento, a súa posible cualificación e as sancións que poidan corresponder, sen prexuízo do que resulte da instrución. 3. Instrutor e secretario do procedemento, con expresa indicación do réxime de recusación dos mesmos. 4. Órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa competencia, indicando a posibilidade de que o responsable poida recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, cos efectos previstos no artigo 18. 5. Medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente para iniciar o procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante o mesmo de conformidade co artigo 25. 6. Indicación do dereito a formular alegacións. á audiencia no procedemento e os prazos para recorrer.

b) 1. Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables. 2. Os feitos profusamente expostos que motivan a incoación do procedemento, a cualificación e as sancións que puidesen corresponder, sen prexuízo do que resulte da instrución. 3. Instrutor e, no seu caso, secretario do procedemento, con expresa indicación do réxime de abstención e recusación dos mesmos. 4. Órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa tal competencia, indicando a posibilidade de que o presunto responsable poida recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, cos efectos previstos no artigo 18. 5. Medidas de carácter cautelar que se acordaron polo

órgano competente para iniciar o procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante o mesmo de conformidade co artigo 25. 6. Indicación do dereito a formular recursos e á audiencia no procedemento e dos prazos para o seu exercicio.

c) 1. Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables. 2. Os feitos sucintamente expostos que motivan o procedemento, a súa cualificación e as sancións que puidesen corresponder, sen prexuízo do que resulte da instrución.3. Instrutor e, no seu caso, secretario do procedemento, con expresa indicación do réxime de recusación e abstención dos mesmos. 4. Órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa tal competencia, indicando a posibilidade de que o presunto responsable poida recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, cos efectos previstos no artigo 8. 5. Medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente para iniciar o procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante o mesmo de conformidade co artigo 15. 6. Indicación do dereito a formular alegacións e recursos, á audiencia no procedemento e dos prazos para o seu exercicio.

d) 1. Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables. 2. Os feitos sucintamente expostos que motivan a incoación do procedemento, a súa posible cualificación e as sancións que puidesen corresponder, sen prexuízo do que resulte da instrución. 3. Instrutor e, no seu caso, secretario do procedemento, con expresa indicación do réxime de recusación dos mesmos. 4. Órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa tal competencia, indicando a posibilidade de que o presunto responsable poida recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, cos efectos previstos no artigo 8. 5. Medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente para iniciar o procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante o mesmo de conformidade co artigo 15. 6. Indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento e dos prazos para o seu exercicio.

57.- O artigo 3 da Lei 3/1993, de 15 de xuño, de normalización lingüística dispón que:

a) Os poderes públicos adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón da súa lingua. Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e Tribunais para obter a protección do dereito a empregar a lingua galega.
b) Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e Tribunais para obter a protección xudicial do dereito a empregar a súa lingua.
c) Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón da súa lingua; de modo que os cidadáns galegos poderán dirixirse aos xuíces e Tribunais desta Comunidade para obter a protección xudicial do dereito a empregar a súa lingua galega.
d) Os poderes públicos adoptarán as medidas necesarias para que ninguén sexa discriminado por razón da lingua. Os cidadáns galegos terán que dirixirse aos xuíces e Tribunais para obter a protección xudicial do dereito a empregar a súa lingua.

58.- Segundo o artigo 9.1 da Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística:

a) Nos rexistros públicos dependentes da Administración autonómica, os asentamentos faranse na lingua oficial de Galicia Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o presenta no rexistro. Nos rexistros públicos non dependentes da

Comunidade Autónoma, a xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso normal do galego e o castelán.
b) Nos rexistros da propiedade dependentes da Administración autonómica, os asentamentos faranse na lingua oficial en que este redactado o documento ou se faga a manifestación. Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o presenta no rexistro. Nos rexistros civís non dependentes da Comunidade Autónoma, a xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso normal do galego.
c) Nos rexistros públicos galegos, os asentamentos faranse na lingua oficial en que este redactado o documento ou se faga a manifestación. Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o presenta no rexistro. Nos rexistros públicos non dependentes da Comunidade Autónoma, a xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso normal do galego e o castelán.
d) Nos rexistros públicos dependentes da Administración autonómica, os asentamentos faranse na lingua oficial en que este redactado o documento ou se faga a manifestación. Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o presenta no rexistro. Nos rexistros públicos non dependentes da Comunidade Autónoma, a xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso normal do galego.

59.- O artigo 10.2 da Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística dispón que:

a) Corresponde á Comunidade autónoma de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios e provincias, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente.
b) Corresponde á Comunidade autónoma de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, das provincias, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo órgano parlamentario correspondente.
c) Corresponde á xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente.

d) Corresponde á xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo alcalde correspondente.

60.- No artigo 4.2 do Tratado da Unión Europea establécese que:

a) A Unión respectará a igualdade dos Estados membros ante os demais Estados, así como a súa identidade nacional representativa, inherente ás estruturas fundamentais políticas e constitucionais destes, tamén no referente á autonomía local e rexional. Respectará as funcións esenciais do Estado, especialmente as que teñen por obxecto garantir a súa integridade territorial, a súa riqueza cultural, manter a orde pública xeneral e salvagardar a seguridade nacional. En particular, a seguridade nacional seguirá sendo responsabilidade exclusiva de cada Estado membro.
b) A Unión respectará a igualdade dos Estados membros ante os Tratados, así como a

súa identidade nacional, inherente ás estruturas fundamentais políticas e constitucionais destes, tamén no referente á autonomía local e rexional. Respectará as funcións esenciais do Estado, especialmente as que teñen por obxecto garantir a súa integridade territorial, manter a orde pública e salvagardar a seguridade nacional. En particular, a seguridade nacional seguirá sendo responsabilidade exclusiva de cada Estado membro.
c) A Unión europea e as súas Institucións propias respectarán a igualdade dos Estados membros ante os Tratados e a lei, así como a súa identidade nacional, inherente ás propias estruturas fundamentais políticas e constitucionais destes, tamén no referente á autonomía local e rexional. Respectarán as funcións esenciais do Estado, especialmente as que teñen por obxecto garantir a súa integridade territorial nacional, manter a orde pública e salvagardar a seguridade nacional. En particular, a seguridade nacional e a orde pública seguirán sendo responsabilidade exclusiva de cada Estado membro.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

61.- O artigo 9 do Tratado da Unión Europea dispón que:

a) A Unión respectará en todas as súas actividades o principio da igualdade dos seus cidadáns, que se beneficiarán por igual da atención das súas institucións, órganos e organismos. Será cidadán da Unión toda acode que teña a nacionalidade dun Estado membro. A cidadanía da Unión engádese á cidadanía nacional sen substituíla.
b) A Unión respectará en todas as actividades das súas Institucións e órganos propios o principio da igualdade dos seus cidadáns, que se beneficiarán por igual da atención das súas institucións, órganos e organismos. Será cidadán da Unión toda acode que teña ou poida chegar a ter a nacionalidade dun Estado membro. A cidadanía da Unión engádese á cidadanía nacional sen substituíla.

c) A Unión respectará en todas as súas actividades o principio da igualdade dos seus cidadáns, que se beneficiarán por igual da atención das súas institucións, órganos e organismos. Será cidadán da Unión toda acode que teña ou poida chegar a ter a nacionalidade dun Estado membro. A cidadanía da Unión engádese á cidadanía nacional, pero pode chegar a substituíla.
d) A Unión respectará en todas as actividades que se sinalen polos seus Tratados o principio da igualdade dos cidadáns, quen serán beneficiados por igual da atención das súas institucións, órganos e organismos. Será cidadán da Unión toda acode que teña a nacionalidade dun Estado membro. A cidadanía da Unión engádese á cidadanía nacional sen substituíla.

62.- Segundo o artigo 16.1 do Tratado da Unión Europea:

a) O Consello europeo exercerá conxuntamente co Parlamento Europeo a función lexislativa e a función orzamentaria. Exercerá funcións de definición de políticas comúns e de coordinación, nas condicións establecidas nos Tratados e as leis.
b) O Consello exercerá conxuntamente co Parlamento Europeo a función lexislativa e a función orzamentaria. Exercerá funcións de definición de políticas e de coordinación, nas condicións establecidas nos Tratados.
c) O Consello exercerá conxuntamente co Parlamento Europeo a función lexislativa, a consultiva e a función orzamentaria. Exercerá funcións de definición de políticas comúns propias e de coordinación, nas condicións establecidas nos Tratados e por lei.
d) O Consello europeo exercerá conxuntamente co Parlamento Europeo a función lexislativa e a función orzamentaria. Exercerá coa Comisión europea funcións de

definición de políticas e de coordinación, nas condicións establecidas nos Tratados.

63.- Segundo o artigo 19.1 do Tratado da Unión Europea:

a) O Tribunal de Xustiza da Unión Europea comprenderá o Tribunal de Xustiza, o Tribunal Xeral e os tribunais especializados. Garantirá o respecto do Dereito na interpretación e aplicación dos Tratados.
Os Estados membros establecerán as vías de recurso necesarias para garantir a tutela xudicial efectiva nos ámbitos cubertos polo Dereito da Unión.

b) O Tribunal de Xustiza da Unión Europea comprenderá o Tribunal de Xustiza, o Tribunal Xeral, os tribunais especializados e o Avogado Xeral. Garantirá o respecto do Dereito Comunitario na interpretación e aplicación dos Tratados.
Os Estados membros establecerán as vías de recurso necesarias para garantir a tutela xudicial efectiva e a igualdade nos ámbitos cubertos polo Dereito da Unión.

c) O Tribunal de Xustiza da Unión Europea comprenderá o Tribunal de Xustiza, o Tribunal Xeral e os tribunais especializados. Garantirá o respecto do Dereito e da lei na interpretación e aplicación dos Tratados Comunitarios
Os Estados membros non establecerán vías de recurso pois quedará garantida a tutela xudicial efectiva nos ámbitos cubertos polo Dereito da Unión.

d) O Tribunal de Xustiza da Unión Europea comprenderá o Tribunal de Xustiza, o Tribunal Xeral, os tribunais especializados e o Avogado Xeral. Garantirá o respecto do Dereito na interpretación e aplicación dos Tratados Comunitarios.
Os Estados membros establecerán as vías de recurso que resulten necesarias para garantir a tutela xudicial efectiva nos ámbitos cubertos polo Dereito da Unión.

64.- Segundo o artigo 3.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea:

a) A Unión disporá de competencia exclusiva nos ámbitos seguintes: a unión aduaneira; o establecemento das normas sobre competencia mercantil necesarias para o funcionamento do mercado interior; a política monetaria dos Estados membros cuxa moeda é o euro; a conservación dos recursos biolóxicos mariños dentro da política pesqueira común; a política comercial común e a política tributaria.
b) A Unión disporá de competencia exclusiva nos ámbitos seguintes: a unión aduaneira; a cohesión económica, social e territorial; o establecemento das normas sobre competencia necesarias para o funcionamento do mercado interior; a política monetaria dos Estados membros; a conservación dos recursos biolóxicos mariños dentro da política pesqueira común; a política comercial común.
c) A Unión disporá de competencia exclusiva nos ámbitos seguintes: a unión aduaneira; o establecemento das normas sobre competencia necesarias para o funcionamento do mercado interior; a política monetaria dos Estados membros cuxa moeda é o euro; a conservación dos recursos biolóxicos mariños dentro da política pesqueira común; a política comercial común.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

65.-Segundo o artigo 26.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea:

a) A Unión adoptará as medidas destinadas a restablecer o mercado interior e a garantir

o seu funcionamento, de conformidade coas disposicións pertinentes dos Tratados.
b) A Unión adoptará as medidas destinadas a establecer o mercado interior ou a garantir o seu funcionamento, de conformidade coas disposicións pertinentes dos Tratados.
c) A Unión adoptará as medidas necesarias para establecer o mercado interior e para garantir o seu funcionamento, de conformidade coas disposicións pertinentes dos Tratados e as Leis.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

66.-Segundo o artigo 45.2 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea:

a) A libre circulación suporá a abolición de toda discriminación por razón da nacionalidade entre os traballadores dos Estados membros, con respecto ao emprego, a retribución e as demais condicións de traballo.
b) A libre circulación de persoas e cousas suporá a abolición de toda discriminación por razón da nacionalidade entre os traballadores dos Estados membros, con respecto ao emprego, a retribución e as demais condicións de traballo.
c) A libre circulación de persoas suporá a abolición de toda discriminación por razón da nacionalidade e sexo entre os traballadores dos Estados membros, con respecto ao emprego, a retribución e as demais condicións de traballo.
d) A libre circulación de persoas e mercancías suporá a abolición de toda discriminación por razón da nacionalidade e sexo entre os traballadores dos Estados membros, con respecto ao emprego, a retribución e as demais condicións de traballo.

67.-Segundo o artigo 11.1 do Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial:

a) Instruído o procedemento, e quince días antes de redactar a proposta de resolución, porase aquel de manifesto ao interesado, salvo no que afecte ás informacións e datos a que se refire o artigo 37.5 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Ao notificar aos interesados a iniciación do trámite facilitaráselles unha copia dos documentos obrantes no procedemento, concedéndolles un prazo non inferior a dez días nin superior a quince para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

b) Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase aquel de manifesto ao interesado, salvo no que afecte ás informacións e datos a que se refire o artigo 37.5 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Ao notificar aos interesados a iniciación do trámite facilitaráselles unha relación dos documentos obrantes no procedemento, a fin de que poidan obter copia dos que estimen convenientes, e concedéndolles un prazo non inferior a quince días nin superior a vinte para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

c) Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase aquel de manifesto ao interesado, salvo no que afecte ás informacións e datos a que se refire o artigo 37.5 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Ao notificar aos interesados a iniciación do trámite facilitaráselles unha relación dos

documentos obrantes no procedemento, a fin de que poidan obter copia dos que estimen convenientes, e concedéndolles un prazo non inferior a dez días nin superior a quince para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

d) Instruído o procedemento, e dez días antes de redactar a proposta de resolución, porase aquel de manifesto ao interesado, salvo no que afecte ás informacións e datos a que se refire o artigo 36.5 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Ao notificar aos interesados a iniciación do trámite facilitaráselles unha relación dos documentos e probas obrantes no procedemento, a fin de que poidan obter copia dos que estimen convenientes, e concedéndolles un prazo non inferior a dez días nin superior a quince para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.

68.-Segundo o artigo14.2 do Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial:

a) Nunca poderá iniciarse procedemento abreviado antes do trámite de audiencia.
b) Só poderá iniciarse procedemento abreviado antes do trámite de audiencia.
c) Só poderá iniciarse procedemento abreviado despois do trámite de audiencia.
d) Sempre poderá iniciarse procedemento abreviado despois do trámite de audiencia.

69.-Segundo o artigo 18.3 do Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial:

a) A responsabilidade entre as Administracións implicadas nunca é solidaria.
Na orde interna, a distribución de responsabilidade entre as distintas Administracións públicas rexerase polos criterios que establezan as fórmulas colexiadas.
b) A responsabilidade entre as Administracións implicadas é solidaria.
Na orde interna, a distribución de responsabilidade entre as distintas Administracións públicas concorrente no feito rexerase pola proporción que establezan as normas colexiadas.
c) A responsabilidade entre as Administracións implicadas é solidaria.
Na orde interna, a distribución de responsabilidade entre as distintas Administracións públicas rexerase polos criterios que establezan as fórmulas colexiadas.
d) A responsabilidade entre as Administracións implicadas pode ser solidaria.
Na orde interna, a distribución de responsabilidade entre as distintas Administracións públicas concorrente rexerase polos criterios de distribución proporcional que establezan as fórmulas colexiadas.

70.-Segundo o artigo 21.1 do Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial:

a) Para a esixencia de responsabilidade patrimonial ás autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas, o órgano competente acordará a iniciación do procedemento, notificando devandito acordo aos interesados, con indicación dos motivos do mesmo, e concedéndolles un prazo de quince días para que acheguen cantos documentos, informacións e probas estimen convenientes.

b) Para a esixencia de responsabilidade patrimonial ás autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas, culpables dun acto doloso ou neglixente, o órgano competente acordará a iniciación do procedemento, notificando devandito acordo aos interesados, con indicación dos motivos do mesmo, e concedéndolles un prazo de vinte días para que acheguen cantos documentos, informacións e probas estimen convenientes.

c) Para a esixencia de responsabilidade persoal ás autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas, o órgano competente acordará a iniciación do procedemento, notificando devandito acordo aos interesados, con indicación dos motivos do mesmo, e concedéndolles un prazo de quince días para que acheguen cantos documentos, informacións e probas estimen convenientes.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

71.- Segundo disponse no artigo 77 do Estatuto Básico do Empregado Público o persoal laboral clasificarase de conformidade

a) Co disposto no propio Estatuto Básico do Empregado Público
b) Coa lexislación laboral
c) Co disposto nas relacións de postos de traballo de cada Administración Pública
d) Co disposto nas normativa de función pública de cada Comunidade Autónoma ou do resto das Administracións Públicas.

72.- Segundo o Estatuto Básico do Empregado Público están lexitimados para convocar unha reunión, ademais das organizacións sindicais, directamente ou a través dos Delegados Sindicais
a) Os empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior ao 20 por cento do colectivo convocado.
b) Os empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior ao 30 por cento do colectivo convocado.
c) Os empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior ao 40 por cento do colectivo convocado.
d) Os empregados públicos das Administracións respectivas en número non inferior ao 50 por cento do colectivo convocado.

73.- No Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia establécese que poderán concederse permutas ou rotacións dos postos de traballo entre dous ou máis traballadores ou traballadoras, persoal fixo, cando concorra, entre outras circunstancias, o seguinte:

a) Que conten con máis de dous anos de servizos continuados na Administración.
b) Que lles falten aos traballadores ou ás traballadoras máis de tres anos para a xubilación.
c) Que lles falten aos traballadores ou ás traballadoras polo menos seis anos para a xubilación.
d) Que conten con máis dun ano de servizos continuados na Administración.

74.- O período de proba fixado no artigo 14 do Convenio Colectivo Único para o persoal laboral, para as categorías incluídas no grupo III será de:

a) 15 días
b) Un mes
c) Dous meses
d) Tres meses

75.- A autorización de compatibilidade para un segundo posto ou actividade no sector público, require a tenor do establecido no artigo 9 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas

a) Previo informe favorable do órgano competente da Comunidade Autónoma ou pleno da Corporación Local conforme á adscrición do segundo posto
b) Informe favorable do Consello Superior da Función Pública
c) Informe da correspondente Xunta de Persoal
d) Todas as respostas son correctas

76.- No Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público establécese que os acordos relativos á clasificación das empresas

a) Inscribiranse a instancia das empresas no Rexistro Xeral de Licitadores e Empresas Clasificadas.
b) Inscribiranse nos correspondentes Rexistros de Licitadores das Administracións Públicas competentes.
c) Comunicaranse de oficio ás respectivas Administracións contratantes.
d) Inscribiranse de oficio no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que corresponda en función do órgano que os adoptou.

77.- O valor estimado dos contratos, aos efectos previstos no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público

a) Virá determinado polo importe anual sen incluír as prórrogas
b) Virá determinado polo importe total, sen incluír o Imposto Sobre o Valor Engadido, pagadero segundo as estimacións do órgano de contratación.
c) Virá determinado polo importe total, incluíndo o Imposto Sobre o Valor Engadido, pagadero segundo as estimacións do órgano de contratación
d) Virá determinado polo importe anual incluíndo o Imposto Sobre o Valor Engadido.

78.- En relación aos contratos de obras e segundo despréndese do artigo 126 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público efectuarase o reformulo do proxecto
a) Unha vez aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación de obra.
b) Unha vez aprobado o proxecto e logo de haberlle adxudicado ao contratista o contrato de obras.
c) Unha vez aprobado o proxecto e despois de que se formalizou o correspondente contrato de obras.
d) Unha vez aprobado o proxecto e cando así o determine o órgano de contratación.

79.- O artigo 154 do Regulamento do Parlamento de Galicia, de 1 de setembro de 1983, establece, con relación ás preguntas parlamentarias, que:

a) se non se indica o contrario, enténdese que quen formula a pregunta solicita resposta oral e, se solicita resposta escrita e non o especifica, enténdese que esta ha de ter lugar na Comisión correspondente.
b) se non se indica o contrario, enténdese que quen formula a pregunta solicita resposta por escrito e, se solicita resposta oral e non o especifica, enténdese que esta ha de ter lugar no Pleno.
c) se non se indica o contrario, enténdese que quen formula a pregunta solicita resposta por escrito e, se solicita resposta oral e non o especifica, enténdese que esta ha de ter lugar na Comisión correspondente.
d) se non se indica o contrario, enténdese que quen formula a pregunta solicita resposta oral e, se solicita resposta escrita e non o especifica, enténdese que esta ha de ter lugar Comisión correspondente.

80.- Non é causa legal de cesamento do Valedor do Pobo, de acordo polo establecido polo artigo 5. 1 da Lei 6 / 1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia:

a) ser condenado, mediante sentenza firme, por delito grave.
b) a expiración do prazo do seu nomeamento.
c) o notorio incumprimento das obrigacións e deberes do seu cargo.
d) a renuncia.

81.- ¿Cal das seguintes afirmacións é falsa?

a) As candidaturas electorais non poderán ser obxecto de modificación unha vez presentadas, salvo no prazo establecido para a subsanación de irregularidades e só por falecemento ou renuncia do titular, operándose automaticamente a subsanación pola orde dos suplentes, salvo que o representante dixese outra cousa.
b) O apoderamiento formalízase ante Notario ou ante o Secretario da Xunta Electoral Provincial ou de Zona, os cales expiden a correspondente credencial, conforme ao modelo oficialmente establecido.
c) A Xunta Electoral de Galicia é o órgano competente para aprobar o modelo oficial das papeletas correspondentes a cada circunscrición.
d) As candidaturas electorais non poderán ser obxecto de modificación unha vez presentadas, salvo no prazo establecido para a subsanación de irregularidades e só por falecemento ou renuncia do titular, operándose automaticamente a subsanación pola orde dos suplentes, salvo que o representante dixese outra cousa.

82.-O artigo 74.2 da Constitución Española de 1978 dispón que as decisións das Cortes Xerais previstas nos artigos:

a) 94.2, 145.2 e 158.3 adoptaranse por maioría de cada unha das Cámaras.
b) 94.1, 145.2 e 158.2 adoptaranse por maioría de cada unha das Cámaras.
c) 94.2, 145.3 e 158.2 adoptaranse por maioría absoluta de cada unha das Cámaras.
d) 94.1, 145.2 e 158.1 adoptaranse por maioría absoluta de cada unha das Cámaras.

83.- De acordo co artigo 75.2 da Constitución Española de 1978, as Cámaras poderán delegar nas Comisións Lexislativas Permanentes a aprobación de proxectos ou proposicións de lei. Quedan exceptuados do disposto no apartado anterior, segundo o art. 75.3 da Constitución:

a) a reforma constitucional, as cuestións internacionais, as leis ordinarias e de bases e os Orzamentos Xerais do Estado.
b) a reforma constitucional, as cuestións internacionais, as leis orgánicas e de bases e os Orzamentos Xerais do Estado.
c) a reforma constitucional, as cuestións internacionais, o réxime electoral xeneral, as leis ordinarias e de bases e os Orzamentos Xerais do Estado.
d) a reforma constitucional, as cuestións internacionais, as institucións básicas do Estado, as leis ordinarias e de bases e os Orzamentos Xerais do Estado.

84.-As eleccións, segundo establece o artigo 68.6 da Constitución Española de 1978,

a) terán lugar entre os trinta días e sesenta días desde a terminación do mandato. O Congreso electo deberá ser convocado dentro dos vinte días seguintes á celebración das eleccións.
b) terán lugar entre os trinta cinco días e sesenta días desde a terminación do mandato. O Congreso electo deberá ser convocado dentro dos vinte e cinco días seguintes á celebración das eleccións.
c) terán lugar entre os trinta días e sesenta cinco días desde a terminación do mandato. O Congreso electo deberá ser convocado dentro dos vinte días seguintes á celebración das eleccións.
d) terán lugar entre os trinta días e sesenta días desde a terminación do mandato. O Congreso electo deberá ser convocado dentro dos vinte e cinco días seguintes á celebración das eleccións.

85.- O artigo 74.1 da Constitución Española de 1978 establece que as Cámaras reuniranse en sesión conxunta para:

a) exercer as competencias lexislativas que o Título II atribúe ás Cortes Xerais.
b) exercer as competencias non lexislativas que o Título III atribúe ás Cortes Xerais.
c) exercer as competencias lexislativas que o Título III atribúe ás Cortes Xerais.
d) exercer as competencias non lexislativas que o Título II atribúe ás Cortes Xerais.

86.-Segundo o artigo 25.f da Lei 50/1997, do Goberno, cando a disposición ou resolución dun Ministro afecte a varios Departamentos revestirá a forma de:

a) Acordo do Consello de Ministros, adoptado a proposta do Ministro da Presidencia.
b) Acordo do Consello de Ministros, adoptado a proposta dos Ministros interesados.
c) Orde do Ministro da Presidencia, ditada a proposta dos Ministros interesados.
d) Orde de calquera dos Ministros interesados, ditada a proposta do Ministro da Presidencia.

87.- Segundo o artigo 22.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, a competencia dos órganos xurisdiccionais en Galicia esténdese:

a) ás cuestións de competencia entre órganos xudiciais en Galicia.
b) no plano penal e social, a todas as instancias e graos, incluídos os recursos de casación e revisión.
c) no plano contencioso administrativo, a todas as instancias e graos, con excepción dos recursos de casación e de revisión, cando se trate de actos ditados pola Xunta e pola Administración de Galicia, naquelas materias que lle corresponda lexislar á

Comunidade Autónoma.
d) no plano penal e social, a todas as instancias e graos, con excepción do recurso de casación para unificar doutrina.

88.- Segundo o artigo 44 do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, a Facenda da Comunidade Autónoma constitúese, entre outros, con:

a) os rendementos dos impostos que estableza a Comunidade Autónoma.
b) as recargas sobre impostos estatais e autonómicos.
c) os rendementos dos impostos cedidos polo Estado a que se refire a Disposición adicional 2ª e de todos aqueles de cesión aprobada polas Cortes Xerais.
d) unha porcentaxe de participación no que se recade no total do Estado por impostos directos e indirectos, excluídos os monopolios fiscais.

89.- En relación coa dotación da fundación e de conformidade coa Lei 12/2006, de 1 decembro, de fundacións de interese galego, ¿cal das seguintes afirmacións resulta inexacta?:

a) Presumirase suficiente a dotación cuxo valor económico alcance os 30.000 euros.
b) Se a achega non é dineraria, deberá incorporarse á escritura de constitución a tasación realizada por un experto independente.
c) Considerarase dotación o mero propósito de recadar donativos.
d) Aceptarase como dotación o compromiso de achegas de terceiros, sempre que devandita obrigación conste en títulos dos que levan execución.

90.- Na Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado, indícase que os recursos económicos dos Organismos autónomos poderán provir das seguintes fontes:

a) Os produtos e rendas dos bens e valores que constitúen o seu patrimonio.
b) Os ingresos ordinarios e extraordinarios que estean autorizados a percibir, segundo as disposicións polas que se rexan.
c) As doazóns, legados e outras achegas de Entidades privadas e de particulares.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

91.-Segundo a Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a creación de entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, require autorización por lei, salvo:

a) Os Organismos autónomos.
b) As Axencias públicas autonómicas.
c) As Entidades públicas empresariais.
d) Os Consorcios autonómicos.

92.- Segundo a Lei 9/1995, de 10 de novembro, o Consello Consultivo de Galicia está integrado por conselleiras e conselleiros electivos que exercerán o seu mandato por:

a) Un período de seis anos, se tiveron a condición de presidenta ou presidente durante catro ou menos anos.

b) Un período de doce anos, se tiveron a condición de presidenta ou presidente durante máis de catro anos.
c) Un período de seis anos, renovable unha soa vez.
d) Un período de catro anos, renovable unha soa vez.

93.- Segundo o previsto na lei orgánica 2/1982, de12 de maio do Tribunal de Contas, os conselleiros de contas:

a) Designaranse polo Goberno na forma determinada na Lei de Funcionamento do Tribunal.
b) Serán designados entre Maxistrados e Fiscais, profesores de Universidade e funcionarios públicos de recoñecida competencia, que nos dous anos anteriores teñan ao seu cargo a xestión dos ingresos do sector público.
c) Serán designados polas Cortes Xerais, seis polo Congreso e seis polo Senado, mediante votación por maioría de tres quintos de cada unha das Cámaras, por un período de nove anos.
d) Serán nomeados polo Rei a proposta do Presidente de Tribunal.

94.- Segundo o previsto na lei orgánica 2/1982, de12 de maio do Tribunal de Contas, respecto da responsabilidade contable:

a) Non haberá lugar á esixencia de responsabilidade subsidiaria cando se probe que o presunto responsable non puido cumprir as obrigacións, cuxa omisión é causa daquela cos medios persoais e materiais que tiver á súa disposición no momento dos feitos.
b) Quedarán exentos de responsabilidade quen actúen en virtude de obediencia debida.
c) Non se esixirá responsabilidade, cando o atraso na rendición, xustificación ou exame das contas e na solvencia dos reparos sexa debido ao incumprimento por outros das súas obrigacións específicas.
d) A b) e a c) son certas.

95.- Segundo o establecido na Lei orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas, respecto das taxas que poden impor as Comunidades Autónomas:

a) Para a fixación das tarifas das taxas poderán terse en conta razoes sociais, benéficas, culturais ou de interese público.
b) O rendemento previsto para cada taxa debe cubrir como mínimo o custo do servizo prestado ou da actividade realizada.
c) As comunidades autónomas poderán establecer taxas pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades en réxime de dereito público da súa competencia, que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos cando non sexan de solicitude voluntaria para os administrados e non se presten ou realicen polo sector privado.
d) Ningunha das anteriores é correcta.

96.- Segundo o artigo 19.Dous da Lei orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas, en caso de tributos cedidos, cada Comunidade Autónoma poderá asumir, nos termos que estableza a Lei que regule a cesión de tributos e no caso do Imposto sobre a renda das persoas físicas:

a) Fixación da contía do mínimo persoal e familiar e deducións da cota e bonificacións.
b) Fixación da contía do mínimo persoal e familiar e a regulación da xestión e deducións da cota.
c) Fixación da contía do mínimo persoal e familiar e deducións da cota e bonificacións.
d) Fixación da contía do mínimo persoal e familiar e a regulación da tarifa e deducións da cota.

97.- Segundo o previsto na Lei 6/1985 de 24 de xuño do Consello de Contas, a iniciativa para o exercicio da función fiscalizadora, correspóndelle:

a) Ao propio Consello e a petición das entidades ás que se refire ao artigo 2 da Lei.
b) Ao Parlamento de Galicia.
c) Ao Presidente da Xunta de Galicia.
d) Ao Tribunal de Contas segundo o plan de fiscalización elaborado ao efecto.

98.- Segundo o previsto na Lei 6/1985 de 24 de xuño do Consello de Contas, a distribución de asuntos entre as seccións corresponderalle:

a) Á Comisión de Goberno.
b) Ao Conselleiro Maior.
c) Ao secretario xeral.
d) Á comisión parlamentaria creada ao efecto.

99.-Segundo o artigo 5 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, os órganos das administracións que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións:

a) Os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
b) Os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación e os criterios obxectivos de adxudicación das subvencións, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
c) Os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución e o procedemento de concesión das subvencións, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
d) Os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.

100.- Serán funcións do Consello Superior de Fundacións da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o previsto na Lei 12/2006, de 1 decembro, de fundacións de interese galego:

a) Planificar e propor as actuacións necesarias para promover e fomentar as fundacións de interese galego.
b) Difundir a existencia e as actividades das fundacións.
c) Controlar o proceso de liquidación das fundacións.
d) Procurar a utilización efectiva e adecuada da denominación «Fundación» e denunciar, no seu caso, ante a autoridade competente a súa utilización por outra clase de entidades.

101.-De conformidade co previsto na Lei 12/2006, de 1 decembro, de fundacións de interese galego, no balance de situación elaborado polo padroado, expresarase:

a) O cadro de financiamento.
b) Os bens e dereitos que conforman o activo da entidade e as obrigacións e fondos propios que forman o seu pasivo.
c) Un inventario dos elementos patrimoniais.
d) O detalle das sociedades participadas.

102.- Aos efectos do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas considérase actividade no sector público a desenvolvida polos membros electivos das asembleas lexislativas das Comunidades Autónomas e das Corporacións Locais?

a) Si
b) Non
c) Non, tendo en conta que esa Lei aplícase só ao persoal das Administracións Públicas pero non aos cargos electivos
d) Si, pero só as actividades públicas enumeradas no artigo 11 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

103.-No artigo 7 apartado 2 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas establécese que os servizos prestados no segundo posto ou actividade

a) Computarase a efectos de trienios
b) Computarase a efectos de trienios e de dereitos pasivos
c) Non se computarán a efectos de trienios, pero si a efectos de dereitos pasivos
d) Non se computarán a efectos de trienios nin de dereitos pasivos, podendo suspenderse a cotización a este último efecto.

104.-O artigo 144 do Regulamento do Parlamento de Galicia, de 1 de setembro de 1983, dispón que os membros da Xunta, ben por petición propia, ou por acordo da Mesa da Cámara e da Xunta de Portavoces, deberán comparecer ante o Pleno ou calquera das súas Comisións para informar sobre un asunto determinado. A iniciativa para a adopción de tales acordos correspóndelle:

a) a tres grupos parlamentarios ou á quinta parte dos membros da Cámara ou da Comisión segundo os casos.
b) a dous grupos parlamentarios ou á cuarta parte dos membros da Cámara ou da Comisión segundo os casos.
c) a un grupo parlamentario ou á terceira parte dos membros da Cámara ou da Comisión segundo os casos.
d) a dous grupos parlamentarios ou á quinta parte dos membros da Cámara ou da Comisión segundo os casos.

105.- Non corresponde á Xunta, de acordo co artigo 4 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,

a) ditar Decretos Lexislativos nos supostos de delegación expresa do Parlamento.
b) informar a interposición de recursos e cuestións de inconstitucionalidade, así como o acudirse nos recursos e cuestións de inconstitucionalidade que afecten a Galicia e a formulación de conflitos de competencias ante o Tribunal Constitucional.
c) resolver mediante decreto os conflitos de atribucións que se susciten entre as diversas Consellerías.
d) aprobar os proxectos de Lei para a súa remisión ao Parlamento e acordar no seu caso a súa retirada.

106.- Con arranxo ao artigo 29.2 da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, o dereito aos tempos de emisión gratuíta, enumerados no apartado anterior:

a) só corresponde aos partidos, federacións e coalicións que presenten candidatura, polo menos, en tres circunscricións electorais da Comunidade Autónoma.
b) só corresponde aos partidos, federacións e coalicións que presenten candidatura, polo menos, en dúas circunscricións electorais da Comunidade Autónoma.
c) só corresponde aos partidos, federacións e coalicións que presenten candidatura, polo menos en catro circunscricións electorais da Comunidade Autónoma.
d) só corresponde aos partidos, federacións e coalicións que presenten candidatura en todas as circunscricións electorais da Comunidade Autónoma.

107.- O artigo 9. 2 da Lei 50 / 1997, do Goberno, indica que o Secretariado do Goberno intégrase:

a) na estrutura orgánica do Ministerio da Presidencia.
b) na estrutura orgánica da Presidencia do Goberno.
c) na estrutura orgánica da Vicepresidencia do Goberno.
d) na estrutura orgánica do Ministerio de Administracións Públicas.

108.- O artigo 86.1 da Constitución Española de 1978, recoñece ao Goberno a facultade de ditar Decretos-Leis en casos de extraordinaria e urxente necesidade, pero establece que non poderá afectar:

a) ao ordenamento das institucións básicas do Estado, aos dereitos, deberes e liberdades dos cidadáns regulados no Capítulo 1º do Título I da Constitución nin ao réxime das Comunidades Autónomas.
b) ao ordenamento das institucións básicas do Estado, aos dereitos, deberes e liberdades regulados no Título I, ao réxime das Comunidades Autónomas nin ao dereito electoral xeneral.
c) ao ordenamento dos dereitos, deberes e liberdades regulados no Título I, ao réxime das Comunidades Autónomas nin ao dereito electoral xeneral.
d) ao ordenamento dos dereitos, deberes e liberdades regulados no Capítulo 2º do Título II, ao réxime das Comunidades Autónomas nin ao dereito electoral xeneral.

109.- Se se quixese reformar o Título II da Constitución Española de 1978, unha vez aprobada a reforma polas Cortes Xerais, o seu artigo 167.3 dispón que:

a) será sometida a referendo para a súa ratificación cando así o soliciten, dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, polo menos unha décima parte dos membros de

calquera das Cámaras.
b) será sometida a referendo para a súa ratificación, dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, en todo caso.
c) será sometida a referendo para a súa ratificación cando así o soliciten dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, a maioría absoluta dos membros de calquera das Cámaras.
d) será sometida a referendo para a súa ratificación cando así o soliciten, dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, a maioría simple dos membros de calquera das Cámaras.

110.- Segundo o artigo 62 da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, cando o Goberno considere que unha disposición ou resolución dunha Comunidade Autónoma non respecta a orde de competencias establecido na Constitución, nos Estatutos de Autonomía ou nas Leis Orgánicas correspondentes:

a) terá que formalizar directamente ante o Tribunal Constitucional, no prazo de dous meses, o conflito de competencias.
b) poderá formalizar directamente ante o Tribunal Constitucional, no prazo de tres meses, o conflito de competencias.
c) poderá formalizar directamente ante o Tribunal Constitucional, no prazo de dous meses, o conflito de competencias.
d) terá que formalizar directamente ante o Tribunal Constitucional, no prazo de tres meses, o conflito de competencias.

111.- O artigo 18. 3 da Lei 6 / 1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia, indica que as queixas ao Valedor do Pobo deberán presentarse:
a) no prazo dun ano cumprido a partir do coñecemento dos feitos.
b) no prazo de dous anos cumpridos a partir do coñecemento dos feitos.
c) no prazo dun ano cumprido a partir da denuncia dos feitos.
d) no prazo de dous anos cumpridos a partir da denuncia dos feitos.

112.- Segundo o artigo 44 do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, a Facenda da Comunidade Autónoma constitúese, entre outros, con:

a) os rendementos dos impostos que estableza a Comunidade Autónoma.
b) as recargas sobre impostos estatais e autonómicos.
c) os rendementos dos impostos cedidos polo Estado a que se refire a Disposición adicional 2ª e de todos aqueles de cesión aprobada polas Cortes Xerais.
d) unha porcentaxe de participación no que se recade no total do Estado por impostos directos e indirectos, excluídos os monopolios fiscais.

113.- Segundo o previsto no artigo 73 do Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a fase de disposición do gasto é:

a) A operación de contraer en contas os créditos exixibles contra a Comunidade Autónoma, en contía certa, unha vez efectuada a pertinente liquidación.
b) O acto en virtude do cal a autoridade competente acorda a realización dun gasto, calculado de forma certa ou aproximada, reservando a tal fin a totalidade ou unha parte do crédito orzamentario legalmente destinado a garantir o cumprimento das obrigacións

que poidan ser consecuencia daquel.
c) O acto en virtude do cal acórdase, concierta ou determina, segundo os casos, logo de cumprir os trámites que de acordo co dereito procedan, a contía concreta que debe alcanzar o compromiso económico para a realización de todo tipo de prestacións.
d) É o acto en virtude do cal certifícase a existencia de crédito suficiente calculado de forma certa, reservando a tal fin a totalidade ou unha parte do crédito orzamentario legalmente destinado a garantir o cumprimento das obrigacións.

114.- Segundo o previsto no Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a autorización de transferencias de crédito desde o programa de imprevistos e funcións non clasificadas aos conceptos e artigos dos demais programas de gasto, calquera que sexa a función ou sección a que corresponda, corresponde a:

a) Ao Consello da Xunta.
b) Ao titular da Consellería correspondente
c) Ao conselleiro de Economía e Facenda.
d) Ao Consello da Xunta a proposta do conselleiro de Economía e Facenda.

115.- Segundo o artigo 14 da Lei orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas, estas precisarán de autorización do Estado:

a) Para concertar operacións de crédito destinadas á realización de gastos de investimento e que o seu importe supere o 25% dos ingresos correntes da Comunidade Autónoma.
b) Para concertar operacións de crédito por prazo inferior a un ano, con obxecto de cubrir as súas necesidades transitorias de Tesourería.
c) Para concertar as operacións previstas nos apartados a) e b) anteriores sempre que da información fornecida polas Comunidades Autónomas, constátese o incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.
d) Ningunha das anteriores é correcta.

116.- Aos efectos do establecido na Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de riscos laborais entenderase por prevención, tal e como se sinala no seu artigo 4

a) O conxunto de medidas que deben adoptar os empresarios e os traballadores para evitar calquera tipo de risco.
b) O conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en todas as fases de actividade da empresa co fin de evitar ou diminuír os riscos derivados do traballo.
c) As medidas e actividades contempladas nos Plans de prevención de riscos aprobadas polas empresas e polos servizos de prevención.
d) O conxunto de medidas que os servizos de prevención das empresas deben adoptar en colaboración que os Comités de Seguridade e Saúde.

117.- Conforme ao establecido na Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de riscos laborais a regulación dos procedementos de avaliación dos riscos para a saúde dos traballadores, normalización de metodoloxías e guías de actuación preventiva, corresponderalle efectuala:

a) Aos empresarios.

b) Aos servizos de prevención, propios ou alleos.
c) Aos empresarios en colaboración cos Delegados de Prevención.
d) Ao Goberno.

118.- Segundo despréndese do artigo 94 do Estatuto Básico do Empregado Público con arranxo a cal dos seguintes principios non se exercerá a potestade disciplinaria?

a) Principio de culpabilidade.
b) Principio de retroactividad das disposicións sancionadoras non favorables.
c) Principio de proporcionalidade.
d) Principio de tipicidad das faltas e sancións.

119.- Segundo o Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia, correspóndelles aos conselleiros ou conselleiras

a) Autorizar calquera medida relativa ao persoal que poida supor modificacións no gasto
b) Emitir informe sobre a adscrición dos cargos e escalas á súa consellería
c) Aprobar os plans de emprego
d) Determinar os intervalos de niveis de postos de traballo que lles corresponderían aos corpos ou escalas do persoal funcionario.

120.- Segundo o previsto na lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, de que prazo dispón o responsable do ficheiro para facer efectivo o dereito de rectificación:

a) Seis meses desde a recepción da solicitude.
b) Un mes desde a recepción da solicitude.
c) Dez días desde a recepción da solicitude.
d) Tres días desde a recepción da solicitude.

121.- Segundo o establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, os órganos de cooperación de composición bilateral e de ámbito xeral que reúnan a membros do Goberno, en representación da Administración Xeral do Estado, e a membros do Consello de Goberno, en representación da Administración da respectiva Comunidade Autónoma, denomínanse:

a) Conferencias Sectoriais.
b) Comisións Bilaterais de Cooperación.
c) Comisións de Goberno.
d) As respostas a) e b) son correctas.

122.- Segundo o artigo 119 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, queda expedita a vía xurisdiccional contencioso-administrativa, cando transcorra:

a) O prazo 4 anos desde a interposición do recurso extraordinario de revisión sen haberse ditado e notificado a resolución.
b) O prazo de 3 meses desde a interposición do recurso extraordinario de revisión sen haberse ditado e notificado a resolución.

c) O prazo de 2 meses desde a interposición do recurso extraordinario de revisión sen haberse ditado e notificado a resolución.
d) O prazo de 1 mes desde a interposición do recurso extraordinario de revisión sen haberse ditado e notificado a resolución.

123.- Se as leis que establezan as infraccións e sancións non fixan prazos de prescrición, segundo o artigo 132 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común:

a) As infraccións e sancións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses
b) As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses
c) As sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.
d) As respostas b) e c) son correctas.

124.- Segundo a Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado, con independencia do que regulen os estatutos dos Organismos autónomos e das entidades públicas empresariais, o Plan inicial de actuación do Organismo público, incluirá en todo caso, os seguintes extremos:

a) Os obxectivos que deba alcanzar na área de actividade encomendada.
b) O patrimonio que se lles asigne para o cumprimento dos seus fins e os recursos económicos que haxa de financiar o Organismo.
c) O réxime relativo a recursos humanos, patrimonio e contratación.
d) A facultade de creación ou participación en sociedades mercantís cando iso sexa imprescindible para a consecución dos fins asignados.

125.- Segundo a Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sinala que afirmación é incorrecta en relación coas axencias públicas autonómicas:

a) Son entidades instrumentais que poden exercer actividades de intervención, fomento, xestión de servizos públicos ou apoio á función administrativa en réxime de descentralización funcional.
b) Son entidades ás que, para o cumprimento de programas específicos, encoméndaselles a realización de actividades en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos.
c) Son entidades nas que o réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado ou polo dereito administrativo, segundo determinen as súas leis de creación e a normativa xeral aplicable.
d) Son entidades nas que o seu persoal estará constituído por persoal funcionario, estatutario e/ou laboral da Xunta de Galicia e, no seu caso, por persoal laboral propio.

126.- Segundo o artigo 225 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea:

a) Por unanimidade dos membros que o compón, o Parlamento Europeo poderá solicitar á Comisión que presente as propostas oportunas sobre calquera asunto que a xuízo daquel requira a elaboración dun acto da Unión para a aplicación dos Tratados. Se a

Comisión non presenta proposta algunha, comunicará as razóns ao Parlamento Europeo
b) Por decisión dunha maioría de dous terzos, o Parlamento e o Consello Europeo poderá solicitar á Comisión que presente as propostas oportunas sobre calquera asunto que a xuízo daquel requira a elaboración dun acto da Unión para a aplicación dos Tratados. Se a Comisión non presenta proposta algunha, comunicará as razóns ao Parlamento Europeo
c) Por decisión da maioría dos membros que o compón, o Parlamento Europeo poderá solicitar á Comisión que presente as propostas oportunas sobre calquera asunto que a xuízo daquel requira a elaboración dun acto da Unión para a aplicación dos Tratados. Se a Comisión non presenta proposta algunha, comunicará as razóns ao Parlamento Europeo.
d) Todas as respostas anteriores son incorrectas.

127.- O artigo 1.3 do Real decreto 1398/1993 do Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora dispón que:

a) Quedan excluídos do presente Regulamento os procedementos de exercicio da potestade sancionadora en materia financeira e fiscal e os procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social. Este Regulamento non terá carácter supletorio das regulacións de tales procedementos
b) Quedan excluídos do presente Regulamento os procedementos de exercicio da potestade sancionadora en materia tributaria e os procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social. No entanto, este Regulamento ten carácter supletorio das regulacións de tales procedementos.
c) Quedan excluídos do presente Regulamento os procedementos de exercicio da potestade disciplinaria respecto do persoal ao seu servizo e de quen estean vinculados a elas por unha relación contractual e os procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social. No entanto, este Regulamento ten carácter supletorio das regulacións de tales procedementos.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

128.- Respecto da tramitación urxente do expediente o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público dispón que acordada a apertura do procedemento de adxudicación, os prezos establecidos nesta Lei para a licitación, adxudicación e formalización dos contratos

a) Reduciranse en quince días.
b) Reduciranse á metade, excepto o prazo dun mes previsto para a formalización do contrato no artigo 156.3, parágrafo primeiro.
c) Reduciranse á metade, excepto o prazo de quince días hábiles establecido no parágrafo primeiro do artigo 156.3 como período de espera antes da formalización do contrato.
d) Reduciranse segundo estableza o órgano de contratación dada a súa preferencia na tramitación.

129.- No procedemento restrinxido regulado no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público

a) Só poderán presentar proposicións aqueles empresarios que, á súa solicitude e en atención á súa solvencia, sexan seleccionados polo órgano de contratación.

b) Só poderán presentar proposición aqueles empresarios que, á súa solicitude e en atención á súa solvencia, negocie con eles a Administración os termos do contrato.
c) Poderán presentar proposicións todos os empresarios que teñan a clasificación esixida na contratación.
d) Non poderán presentar proposicións mais que os cinco empresarios cos que como máximo negociaría a Administración os termos do contrato.

130.- Respecto da xornada de traballo o Convenio Colectivo Único para o persoal laboral establece que non terán natureza de horas extraordinarias aquelas que, excedendo das 37,30 horas semanais, non superen as

a) 1.135 horas anuais
b) 1.545 horas anuais
c) 1.665 horas anuais
d) 1.775 horas anuais

131.- Segundo establece o artigo 10 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, quen acceda por calquera Título a un novo posto do sector público que con arranxo a esa Lei resulte incompatible co que viñera desempeñando, deberá optar por un deles

a) Antes do nomeamento correspondente.
b) No prazo dun mes desde o nomeamento do novo posto.
c) No prazo de 15 días a contar desde o nomeamento do novo posto.
d) Dentro do prazo de toma de posesión.

132.- Segundo o previsto na lei 6/1985 de 24 de xuño do Consello de Contas, o Conselleiro Maior será nomeado polo Presidente da Xunta de Galicia, por un período de:

a) Seis anos
b) Tres anos
c) Dous anos
d) Catro anos

133.- Segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencións reguladas nesta lei, salvo que pola natureza da subvención exceptúese pola súa normativa reguladora:

a) As persoas ou entidades que non se achen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pago algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, nos termos que reglamentariamente determínense.
b) As asociacións incursas nas causas de prohibición previstas nos apartados 7 e 8 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
c) As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado, que carezan de personalidade xurídica.
d) Todas as anteriores son correctas.

134.- Segundo o artigo 16 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, a elaboración de estudos e análises sobre a actividade subvencional da Comunidade Autónoma, é un dos fins para os que haberá de servir:

a) O rexistro público de subvencións
b) O control financeiro das subvencións
c) O plan estratéxico de subvencións
d) O órgano colexiado previsto no artigo 21 da lei.

135.- Segundo o artigo 8.1 da Constitución Española de 1978:

a) As Forzas Armadas, constituídas polo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire, teñen como misión garantir a soberanía, unidade e independencia de España, defender a súa integridade territorial e o ordenamento constitucional.
b) As Forzas Armadas, constituídas polo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire, teñen como misión garantir a soberanía e independencia de España, defender a súa integridade territorial e o ordenamento constitucional.

c) As Forzas Armadas, constituídas polo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire, teñen como misión garantir a soberanía e independencia de España, defender a súa integridade territorial e o ordenamento xurídico nacional.
d) Todas as respostas son incorrectas.

136.- Segundo o artigo 59.4 da Constitución Española de 1978:

a) Para exercer a Regencia é preciso ser español e maior de idade.
b) Para exercer a Regencia é preciso ser español de orixe e maior de idade.
c) Para exercer a Regencia é preciso ser español de nacemento e maior de idade.
d) Ningunha resposta é correcta.

137.- O artigo 8.1 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) A afectación dos bens e dereitos do patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia acordarase a instancia de parte pola persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio mediante decreto, a iniciativa propia ou a petición da consellería ou entidade interesada na afectación.
b) A afectación dos bens e dereitos do patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia acordarase de oficio polo Consello da Xunta mediante orde, a iniciativa propia ou a petición da consellería ou entidade interesada na afectación.
c) A afectación dos bens e dereitos do patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia acordarase de oficio pola persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio mediante orde, a iniciativa propia ou a petición da consellería ou entidade interesada na afectación.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

138.- O artigo 25.1 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) Os bens e dereitos de titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia afectados ao cumprimento dos fins e servizos das consellerías e entidades públicas instrumentais non poderán afectarse a usos ou servizos públicos de competencia doutras administracións públicas, sen transferencia de titularidade nin cambio da súa cualificación xurídica.
b) Os bens e dereitos de titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia afectados ao servizo das consellerías e entidades públicas instrumentais poderán afectarse a outros servizos públicos de competencia doutras administracións públicas, sen transferencia de titularidade nin cambio da súa cualificación xurídica.
c) Os bens e dereitos de titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia afectados ao cumprimento dos fins ou servizos das consellerías e entidades públicas instrumentais poderán afectarse a servizos públicos de competencia doutras administracións públicas, con transferencia de titularidade e cambio da súa cualificación xurídica.
d) Os bens e dereitos de titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia afectados ao cumprimento dos fins ou servizos das consellerías e entidades públicas instrumentais poderán afectarse a outros usos ou servizos públicos de competencia doutras administracións públicas, sen transferencia de titularidade nin cambio da súa cualificación xurídica.

139.- O artigo 35.3 da Lei orgánica 2/1979 do Tribunal Constitucional dispón:

a) A formulación da cuestión de constitucionalidade orixinará a suspensión provisional das actuacións no proceso xudicial ata que o Tribunal Constitucional pronúnciese sobre a súa admisión.
b) A formulación da cuestión de constitucionalidade orixinará a suspensión das actuacións no proceso xudicial ata que o Tribunal Constitucional pronúnciese sobre o fondo.
c) A formulación da cuestión de inconstitucionalidade orixinará a suspensión provisional das actuacións no proceso xudicial ata que o Tribunal Constitucional pronúnciese sobre a súa admisión a trámite.
d) Todas as respostas anteriores son incorrectas

140.- O artigo 33.2 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) O uso común privativo está suxeito a autorización ou a concesión, se a súa duración é superior a catro anos e efectúase con obras ou instalacións fixas.
b) O uso común especial está suxeito a autorización ou a concesión, se a súa duración é superior a cinco anos ou se efectúa con obras ou instalacións fixas.
c) O uso común especial está suxeito a autorización ou a concesión, se a súa duración é superior a catro anos ou se efectúa con obras ou instalacións fixas.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

141.- O artigo 7.1 da Lei 3/1993, de 15 de xuño, de Normalización lingüística dispón que:

a) No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns poderán utilizar calquera das dúas linguas oficiais nas relacións coa Administración de xustiza.

b) No ámbito xurisdiccional de Galicia, os cidadáns e os poderes públicos poderán utilizar calquera das dúas linguas oficiais nas relacións coa Administración de xustiza.
c) No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns, así como os poderes públicos poderán utilizar calquera das dúas linguas oficiais nas relacións coa Administración de xustiza.
d) No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns e os poderes públicos deberán utilizar calquera das dúas linguas oficiais nas relacións coa Administración de xustiza.

142.- O artigo 39.4 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) As autorizacións demaniales poderán revogarse temporalmente polo órgano que as outorgou por razóns de interese público, sen xerar dereito a indemnización, cando resultasen incompatibles con condicións xerais aprobadas con posterioridade, producisen danos no dominio público, impedisen a utilización do ben para actividades de maior interese público ou menoscabasen o uso xeral.
b) As autorizacións demaniales poden revogarse unilateralmente polo órgano que as outorgou en calquera momento por razóns de interese xeral, sen dereito a indemnización, cando resultasen incompatibles con condicións xerais, producisen danos no dominio público, impedisen a utilización do ben para actividades de maior interese público ou menoscabasen o uso xeral.
c) As autorizacións demaniales poden revogarse unilateralmente polo órgano que as outorgou en calquera momento por razóns de interese público, sen xerar dereito a indemnización, cando resultasen incompatibles con condicións xerais aprobadas con posterioridade, producisen danos no dominio público, impedisen a utilización do ben para actividades de maior interese público ou menoscabasen o uso xeral.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

143.- O artigo 48.1 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) Os negocios xurídicos de adquisición e alleamento de bens inmobles e dereitos reais formalizaranse en escritura pública. Os arrendamentos e demais negocios xurídicos que graven inmobles que se inscriban no rexistro da propiedade formalizaranse en escritura pública cando haxan de ser inscritos naquel. Os gastos xerados serán por conta da parte que solicitase a formalización.
b) Os negocios xurídicos de adquisición ou alleamento de bens inmobles, mobles e os dereitos reais formalizaranse en escritura pública. Os arrendamentos urbanos e demais negocios xurídicos de explotación de mobles e inmobles que sexan susceptibles de inscrición no rexistro da propiedade formalizaranse en escritura pública cando vaian ser inscritos naquel. Os gastos xerados serán de conta da parte que solicite a formalización.
c) Os negocios xurídicos de adquisición de bens inmobles ou dereitos reais formalizaranse por escrito. Os arrendamentos de explotación de inmobles que sexan inscritos no rexistro da propiedade formalizaranse en escritura pública. Os gastos xerados serán a conta da parte que solicite a formalización.
d) Os negocios xurídicos de adquisición ou alleamento de bens inmobles e dereitos reais formalizaranse en escritura pública. Os arrendamentos e demais negocios xurídicos de explotación de inmobles que sexan susceptibles de inscrición no rexistro da propiedade formalizaranse en escritura pública cando vaian ser inscritos naquel. Os gastos xerados serán de conta da parte que solicitase a citada formalización.

144.- O artigo 50.1 da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do Patrimonio da comunidade autónoma de Galicia dispón que:

a) Na Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia a competencia para adquirir a título oneroso ou gratuíto bens inmobles e dereitos reais corresponde á consellería competente en materia de patrimonio.
b) Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a competencia para adquirir a título oneroso bens inmobles e dereitos sobre os mesmos corresponde á consellería competente en materia de patrimonio.
c) Na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a capacidade para adquirir a título oneroso bens inmobles e dereitos reais corresponde á consellería competente en materia de patrimonio.
d) Todas as respostas anteriores son incorrectas.

145.- ¿Cal dos seguintes é segundo o artigo 12 do Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia un órgano superior en materia de función pública?

a) O director ou directora xeral da Función Pública.
b) A Mesa Xeral de Negociación da Función Pública
c) O Consello Galego da Función Pública
d) O Consello Consultivo da Función Pública.

146.-De acordo co disposto no artigo 73 do Estatuto Básico do Empregado Público as Administracións Públicas poderán asignarlle á súa persoal funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desempeñan?:

a) Non.
b) Si, sempre que existan razóns de urxencia e necesidade e tramítese o procedemento previsto para tal efecto.
c) Si, sempre que resulten adecuadas á súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo xustifíqueno sen diminución nas retribucións.
d) Ningunha das tres respostas anteriores é correcta.

147.-No artigo 66 do Estatuto Básico do Empregado Público disponse que a pena principal ou accesoria de inhabilitación especial para cargo público, cando adquira firmeza a sentenza que a impoña produce:

a) A perda da condición de funcionario respecto de todos os empregos ou corpos que tivese.
b) A perda da condición de funcionario respecto daqueles empregos ou cargos especificados na sentenza.
c) A suspensión da condición de funcionario durante o tempo que se determine na sentenza.
d) A separación do servizo durante o tempo que se determine na sentenza.

148.-Cal dos seguintes conceptos do complemento salarial de singularidade do posto non se recolle no Convenio Colectivo Único para o persoal laboral:

a) Especial dedicación
b) Xornada especial

c) Responsabilidade
d) Dirección.

149.- Segundo a Lei 12/2006, de 1 decembro, de fundacións de interese galego, o padroado como órgano colexiado de goberno e de representación da fundación estará integrado polo número de membros que determinen os seus estatutos, con:

a) Un mínimo de tres membros, incluído o seu presidente.
b) Un mínimo de cinco membros, incluído a súa presidenta/-e.
c) Un mínimo de cinco membros, incluído a súa presidenta/-e e a/o secretaria/-ou.
d) Todas as respostas anteriores son falsas.

150.- Segundo o artigo 31. 3 da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, as primeiras papeletas confeccionadas entregaranse:

a) á Xunta de Galicia para o seu envío aos residentes ausentes que viven no estranxeiro.
b) ao Ministerio de Asuntos Exteriores para o seu envío aos residentes ausentes que viven no estranxeiro.
c) Á Xunta Electoral de Galicia para o seu envío aos residentes ausentes que viven no estranxeiro.
d) á Delegación do Goberno para o seu envío aos residentes ausentes que viven no estranxeiro.

PREGUNTAS DE RESERVA

151.- O artigo 20.1 letras a e b da Lei 50/1997, do Goberno, indica que poden delegar o exercicio de competencias propias:

a) O Presidente do Goberno en favor do Vicepresidente ou Vicepresidentes, dos Ministros e dos Secretarios de Estado. Os Ministros en favor dos Secretarios de Estado dependentes deles, dos Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas e dos órganos directivos do Ministerio.
b) O Presidente do Goberno en favor do Vicepresidente ou Vicepresidentes e do Ministro da Presidencia. Os Ministros en favor dos Secretarios de Estado dependentes deles, dos Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas e dos órganos directivos do Ministerio.
c) O Presidente do Goberno en favor do Vicepresidente ou Vicepresidentes e dos Ministros. Os Ministros en favor dos Secretarios de Estado dependentes deles, dos Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas e dos órganos directivos do Ministerio.
d) O Presidente do Goberno en favor do Vicepresidente ou Vicepresidentes e dos Ministros. Os Ministros en favor dos Secretarios de Estado dependentes deles, dos Delegados do Goberno nas Comunidades Autónomas e dos Directores Xerais do Ministerio.

152.- A Lei 9/1995, de 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia, establece que a condición de conselleiro poderá ser compatible con:

a) O exercicio da actividade docente ou investigadora.
b) Calquera cargo político do Estado, comunidades autónomas ou entidades locais.

c) Funcións directivas en sindicatos de traballadores ou asociacións de empresarios.
d) O exercicio da avogacía.

153.-O artigo 135.2 da Constitución Española dispón:

a) O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non poderán incorrer nun déficit orzamentario que supere as marxes establecidas pola Unión Europea para os seus Estados Membros.
b) O Estado e as Comunidades Autónomas poderán incorrer nun déficit equilibrado que non supere as marxes establecidas, no seu caso, pola Unión Europea para os seus Estados Membros.
c) O Estado, as Comunidades Autónomas e demais Administracións Públicas non poderán incorrer nun déficit estrutural que supere as marxes establecidas pola Unión Europea por lei para os seus Estados Membros.
d) O Estado e as Comunidades Autónomas non poderán incorrer nun déficit estrutural que supere as marxes establecidas, no seu caso, pola Unión Europea para os seus Estados Membros.